



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

Dirección de Regionalización



# Norte

**Dinámicas territoriales:**  
aportes para la orientación estratégica  
de la regionalización de la Universidad de Antioquia





**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

**Dirección de Regionalización**

# ***Norte***

**Dinámicas territoriales:**  
aportes para la orientación estratégica  
de la regionalización de la Universidad de Antioquia

© Alejandro Pimienta Betancur, Clara Inés Aramburo Siegert, Lida Sepúlveda López  
© Universidad de Antioquia, Dirección de Regionalización  
© Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales  
© Universidad de Antioquia, Fondo Editorial BIOGÉNESIS  
ISBN: 978-628-7592-47-6  
ISBN ebook: 978-628-7592-50-6  
Primera edición: diciembre de 2022

*Diseño de cubierta:* Dirección de Comunicaciones Universidad de Antioquia  
*Diagramación:* Imprenta Universidad de Antioquia  
*Corrección de estilo y edición:* Daniel Alejandro Cardona Henao  
*Fotografías:* Archivo Dirección de Regionalización, Archivo Histórico  
*Impresión y terminación:* Publicaciones VID

Impreso y hecho en Medellín, Colombia/Printed and made in Medellín, Colombia

Se autoriza la reproducción total o parcial, por cualquier medio y para fines académicos, siempre que se haga el debido reconocimiento a las autoras y a los autores, respetando los derechos de autor.

Dirección de Regionalización, Universidad de Antioquia  
Calle 67 No. 53-108, bloque 16, oficina 308  
Medellín, Colombia, Sudamérica  
Teléfono: (604) 219 51 57  
Correo electrónico: dirregionalizacion@udea.edu.co

Instituto de Estudio Regionales, Universidad de Antioquia  
Calle 67 No. 53-108, bloque 9, oficina 243  
Medellín, Colombia, Sudamérica  
Teléfono: (604) 219 56 99  
Correo electrónico: cediner@udea.edu.co

Fondo Editorial BIOGÉNESIS  
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia  
Carrera 75 No. 65-87, bloque 46, oficina 225  
Teléfono: (604) 219 91 77 / 91 76  
Correo electrónico: fondoeditorialbiogenesis@udea.edu.co

El contenido de la obra corresponde al derecho de expresión de los autores y las autoras y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores y las autoras asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Norte. Dinámicas territoriales: aportes para la orientación estratégica de la regionalización de la Universidad de Antioquia / Alejandro Pimienta Betancur ; Clara Inés Aramburo Siegert ; Lida Sepúlveda López. -- 1a. ed. -- Medellín : Universidad de Antioquia, Dirección de Regionalización ; Instituto de Estudios Regionales ; Fondo Editorial Biogenesis, 2022.

120 páginas.

ISBN impreso: 978-628-7592-47-6

ISBN digital: 978-628-7592-50-6

1. Desarrollo territorial 2. Regionalización 3. Norte (Antioquia)

338.93



Escanea y conoce más sobre #UdeARegiones

Esta publicación hace parte de los resultados del proyecto de investigación “Análisis a la regionalización de la Universidad de Antioquia y aportes a su mejoramiento” (código SIU 2019-25670), liderado por el Grupo Estudios del Territorio y financiado por la Dirección de Regionalización, con el apoyo del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (Acta de compromiso No. 20440004-01-2019).



# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

John Jairo Arboleda Céspedes, rector

## **Dirección de Regionalización**

Jorge Iván Gallego Mosquera, director

Gladis Adriana Aristizábal Montoya

Claudia Elena Montoya Aguirre

Gloria María Ceballos Maya

Vannesa Monsalve Restrepo

## **Instituto de Estudios Regionales –INER–**

*Coordinación general del proyecto PAI (2019-2021)*

Vladimir Montoya Arango

*Coordinación del proyecto editorial (2021-2022)*

Alejandro Pimienta Betancur

*Investigadores principales del proyecto de investigación*

Alejandro Pimienta Betancur

Clara Aramburo Siegert

Lida Sepúlveda López

### *Coinvestigadoras*

María Teresa Arcila Estrada

Paula Andrea Hinstroza Blandón

Katerine Montoya Castañeda

### *Ingeniero*

Julián Andrés Giraldo Hoyos

### *Asistentes de investigación*

Estefanía Ramírez Ceballos

Marlly Andrea García Jiménez

## **Equipo regional Sede Norte**

Claudia Juliana Correa Correa, directora

Homer Alonso Hincapié

Natalia Gómez Madrigal

Lined Areiza Saldarriaga

Andrés Mauricio López Zuluaga

Juan José Lopera Tabares





## Contenido

Prólogo.....	11
La gestión del conocimiento territorial, el reto para la acción de regionalización .....	15
Presentación .....	21
1. Disparidades territoriales, desconexiones espaciales e intervenciones económicas desiguales y especializadas han mantenido al Norte como una subregión fragmentada .....	25
1.1. Vialidad, factor de integración o desintegración territorial en Norte .....	26
1.2. Disparidades territoriales por factores económicos.....	29
1.3. Generación de energía hidroeléctrica.....	36
1.4. Diferencias por dinámicas sociales.....	37
2. Deterioro de ecosistemas naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de aguas y suelos producto de intervenciones antrópicas de carácter productivo y por construcción de obras de infraestructura .....	41
2.1. Áreas protegidas en Norte .....	44
2.2. Agua, bosques y suelos bajo amenaza .....	48
2.3. Conflictos socioambientales .....	58

3. Recrudescimiento de la violencia e incremento de la criminalidad ejercida por grupos armados reconfigurados y sus disputas por el control del territorio, sus recursos y las rentas ilegales.....	67
3.1. Las víctimas del conflicto armado .....	71
3.2. Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos .....	74
3.3. La violencia también afecta a los indígenas .....	75
3.4. ETCR Santa Lucía en Ituango.....	76
3.5. Municipios PDET en Norte.....	78
3.6. Pobreza, cultivos de coca, violencia y PNIS.....	79
4. Emergencia de movimientos sociales y organizaciones populares relacionadas con la defensa del territorio y la resistencia a las hidroeléctricas .....	87
4.1. Reclamos colectivos por los efectos económicos, sociales y ambientales de las hidroeléctricas .....	88
4.2. Reclamos por los incumplimientos del Gobierno nacional a los Acuerdos de Paz.....	98
4.3. Por la defensa del territorio y el derecho a la tierra. Marcha Patriótica, Anzorc: paros agrarios y zonas de reserva campesina .....	102
4.4. Otros sectores sociales organizados .....	104
Conclusión .....	109
Bibliografía .....	113



## Índices

### Tablas

<b>Tabla 1.</b> Localización de zonas ambientalmente homogéneas. Subregión Norte .....	44
---	----

### Mapas

<b>Mapa 1.</b> Subregión Norte de Antioquia.....	23
--	----





## Prólogo

Han pasado más de dos décadas desde que la Universidad de Antioquia asumió el compromiso de honrar su vocación regional y de proyectarse con todo su potencial al departamento. Han sido años en los que la institución ha servido con equidad, pertinencia y calidad a las regiones: nos hemos adentrado en sus territorios para descubrir y potenciar su riqueza natural, hemos reconocido y valorado su patrimonio cultural y étnico, y sobre todo, hemos construido fuertes lazos con sus pobladores y trabajado de la mano para lograr superar las carencias históricas presentes y apostar juntos por un mayor bienestar. La educación pública con calidad ha sido el puntal –y la regionalización la vía– desde el cual la Alma Máter ha logrado insertarse en la vida regional, convirtiéndose en un factor indispensable para dinamizar el desarrollo integral de los territorios.

Luego de estos años, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ser la universidad de todos los antioqueños. Para ello, es necesario considerar la realidad actual de los territorios y la madurez que como institución hemos adquirido en este proceso de inserción para poder avanzar hacia una regionalización más estratégica, articulada, integral y sistémica, como la que nos orienta el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2027: *Una universidad innovadora para la transformación de los territorios.*

La colección *Dinámicas territoriales: aportes para la orientación estratégica de la regionalización de la Universidad de Antioquia* surge precisamente de la necesidad de reflexionar sobre el pasado, presente y futuro institucional en las regiones y de redimensionar el sentido misional universitario en estos territorios. Es fruto de un arduo ejercicio de investigación llevado a cabo, entre los años 2019 y 2021, por el Instituto de Estudios Regionales –INER– con la Dirección de Regionalización y que nos brinda un claro panorama de las actuales configuraciones socioterritoriales de las regiones.

Este valioso trabajo está compuesto por ocho libros que nos brindan una lectura particularizada de las subregiones Oriente, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Occidente, Norte y Nordeste. Mediante núcleos estratégicos diferenciales se analizan fenómenos sociales, económicos, ambientales, espaciales, de conflictos y violencias presentes en estos territorios, así como su articulación e interacción con los actores que allí cohabitan e intervienen.

Este ejercicio investigativo ha sido la base para plantear, de manera colectiva, la apuesta de futuro de la Alma Máter en el departamento. Como resultado, se han definido los retos y lineamientos que buscan orientar los esfuerzos institucionales durante el periodo 2020-2030; líneas de actuación que permitirán seguir consolidando la presencia regional de la institución, así como garantizar su sostenibilidad y las capacidades necesarias para afrontar, junto con las comunidades regionales, los desafíos educativos, económicos, sociales y ambientales venideros.

Sin duda esta colección nos proporciona una clara visión de las actuales dinámicas regionales y nos convoca, a la luz de sus hallazgos, a resignificar nuestra presencia institucional en el departamento y a seguir innovando en nuestras prácticas y estrategias universitarias. Por eso los invito a leerla, a profundizar y apropiarse de su contenido para que entre todos construyamos nuevas formas

de ser universidad en las regiones y para que nuestra Alma Máter continúe cumpliendo, con pertinencia y calidad, los sueños que millones de antioqueños depositan en ella.

John Jairo Arboleda Céspedes  
Rector





## La gestión del conocimiento territorial, el reto para la acción de regionalización

*A pesar de la fuerza del orden global,  
la región puede ser comprendida como un tejido continuo  
y heterogéneo de modernidades y formas heredadas,  
materiales e inmateriales,  
que constituyen horizontalidades.*

María Laura Silveira<sup>1</sup>

Grandes apuestas políticas de gobernanza suponen estrategias escalares de aunar esfuerzos entre diversos agentes involucrados en los problemas territoriales, por citar un ejemplo, la Agenda Global de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, pero también se podrían citar los diversos planes de desarrollo, los planes sectoriales, las políticas públicas y cualquier construcción y visión de futuro asociada a planes de vida, inteligencias colectivas, buen vivir, vivir sabroso, puntos de vista situados, entre otros, y así se ha venido haciendo en todo el mundo; pero las condiciones y capacidades tácticas para territorializar dichas estrategias y que estas tengan mejor oportunidad de éxito varían mucho entre una y otra espacialidad;

---

1. Silveira, M. L. (2009). Región y división territorial del trabajo: desafíos en el período de la globalización. Investigación y desarrollo, 17(2), 434-455. <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/792/445>

en unos recortes espaciales (localidades y regiones) hay factores preexistentes y procesos socioterritoriales que pueden propiciar mejor el cambio –o dificultarlo– que en otros.

Uno de esos factores que afecta la territorialización de las estrategias, bien se podría decir, la regionalización de los procesos, es la gestión del conocimiento sobre una formación socioespacial determinada, llámese subregión, una provincia o un municipio. No en vano es que uno de los grandes retos de nuestro tiempo en América Latina es la producción y gestión de conocimientos territoriales, que sirvan de plataforma para que los agentes que participan en las gobernanzas que dinamizan los cambios, tanto en la escala local como la subregional, departamental y nacional, tengan las mejores condiciones para participar con incidencia en la toma de decisiones y en igualdad de condiciones. Sin un conocimiento territorial adecuado (válido, confiable, justo, disponible) no se puede gestionar un cambio territorial que nos lleve, como sociedad, a una justicia espacial. A menor nivel de gestión de conocimiento territorial, mayores serán las dificultades para una gobernanza multinivel o escalar, y probablemente mayores serán los obstáculos para la producción de una justicia espacial. No es solo tener un conocimiento ya elaborado, por ejemplo, por un centro de investigaciones; es que ese conocimiento esté disponible y accesible para los agentes territoriales, que pueda ser apropiado, ser usado, y puesto en discusión con otros conocimientos en un auténtico y radical diálogo de saberes. Por eso el reto no es producir conocimientos sino *gestionar* los conocimientos.

En materia de producción de conocimientos e información sobre Antioquia y las subregiones hemos avanzado mucho, son incontables e inabarcables los registros y productos de nuevo conocimiento y apropiación social. Uno de los centros que ha participado en esa producción de conocimiento ha sido el Instituto de Estudios Regionales –INER– de la Universidad de Antioquia, que en sus más de

30 años de trayectoria académica ha producido un enorme acumulado de conocimiento territorial sobre las localidades y subregiones de Antioquia, gracias a una infinidad de proyectos de investigación, tesis de posgrado y consultorías.

El aporte del INER al conocimiento territorial de Antioquia es diverso y transdisciplinario, en tanto su producción ha respondido a distintos problemas de investigación que se han ido abordando en diferentes momentos. Con enfoques metodológicos plurales, en muchas ocasiones se han propiciado procesos de coproducción de conocimiento con actores locales; las unidades de análisis y las escalas han sido múltiples, van desde miradas que se interesaron por reconocer dinámicas locales y del lugar, hasta procesos que se preguntaron por lógicas subregionales y departamentales, procesos de fronteras, redes, incluso relaciones local-regional-global; en otros momentos las preguntas versaron sobre las diferentes formaciones socioespaciales (espacialidades), pasando por los estudios que indagaron por las dimensiones específicas de los procesos regionales y territoriales, por ejemplo, interesados en conocer lo ambiental, lo económico, lo cultural, entre otros; o por expresiones o lógicas situadas de fenómenos como la paz, la violencia, la educación, el desarrollo, el poder, etc. En cuanto a las temporalidades, el conocimiento producido va desde las indagaciones que se han realizado en perspectiva arqueológica e histórica, los análisis del presente y la coyuntura, hasta los análisis en perspectiva de futuro, desde la planeación y la prospectiva. Por la naturaleza de la forma en que se ha producido dicho conocimiento, respondiendo a las lógicas de los proyectos, es un conocimiento disperso.

Esta serie *Dinámicas territoriales: aportes para la orientación estratégica de la regionalización de la Universidad de Antioquia*, compuesta por ocho (8) volúmenes, representa un gran esfuerzo de síntesis de todo ese acumulado, no solo de la producción propia del INER, sino en general del conocimiento disponible sobre Antioquia y las

subregiones, el cual fue problematizado con diferentes actores territoriales, dando como resultado un trabajo que busca evidenciar las principales lógicas que configuran los espacios subregionales hoy en día. El lector no va a encontrar un abordaje por dimensiones, ni caracterizaciones, ni una organización de los datos más actualizados, hay fuentes especializadas que proporcionan esa información. Lo que la serie aporta es un análisis crítico y actualizado de la realidad territorial de esos recortes espaciales denominados subregiones, presentado mediante una innovadora estrategia analítica de núcleos problémicos que el equipo de investigación explica para cada caso en la presentación.

El enfoque epistemológico y metodológico del proyecto de investigación, que permitió llegar a estos resultados, respondió a un proceso de concertación y discusión con la Dirección de Regionalización, por tanto, el resultado es fruto de un trabajo colaborativo. Con esta obra, la Universidad de Antioquia fortalece su autocompromiso con la forma en que ha decidido conducir la regionalización universitaria, caracterizada por una gestión de la educación superior en las sedes y seccionales dinamizada desde la gestión del conocimiento territorial, estrategia prevista desde el mismo momento en que se formuló el Plan Estratégico de Regionalización (2002) y que en su momento permitió la publicación de los textos de la primera serie *Desarrollo Regional. Una tarea común Universidad-Región* entre los años 2000 y 2007.

A lo largo de toda la experiencia de regionalización se ha mantenido un vínculo orgánico entre el INER y la Dirección de Regionalización para dinamizar la gestión del conocimiento territorial, que hoy, con la publicación de esta serie, alcanza una nueva etapa, esperando que sea una contribución fructífera para la gestión del conocimiento territorial.

En el volumen *Norte. Dinámicas territoriales: aportes para la orientación estratégica de la regionalización de la Universidad de Antioquia* se

publica una parte de los resultados del proyecto de investigación que se desarrolló entre los años 2019 y 2021. Otros resultados del proyecto, asociados al componente de análisis de la gestión educativa, es decir, a la comprensión de lo propiamente misional de la Universidad de Antioquia en la subregión, son el objeto de otra serie de publicaciones, pero es preciso resaltar que las dinámicas territoriales y la gestión educativa fueron abordadas en el proyecto como procesos analíticos interdependientes, por esa razón, y con la idea de avanzar en una gestión del conocimiento territorial, se invita a las personas interesadas en comprender o gestionar la regionalización universitaria a abordar de manera integral ambas series de publicaciones y, en general, a acercarse a los demás insumos que generó el proyecto y que están disponibles en el sitio web de la Dirección de Regionalización.

La investigación realizada propone entender la dinámica actual de la subregión del Norte a partir de cuatro núcleos estratégicos que recogen ejes estructurantes históricos, dimensiones del desarrollo y tensiones territoriales. El primer núcleo aborda el ordenamiento territorial señalando que, debido a factores físico-espaciales y económicos, la subregión Norte sigue fragmentándose, tendiendo a dinámicas diferenciadas en cuatro espacialidades que generan disparidades territoriales, estas son: altiplano norte o Meseta de los Osos, vertiente del río Cauca, vertiente del río Porce-Nechí o vertiente de Chorros Blancos y vertiente del río Porce.

El segundo núcleo problémico expresa, en la escala subregional, el problema ecológico y ambiental de escala global, en particular señala que la lectura territorial del Norte implica entender el fuerte deterioro de sus ecosistemas naturales, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de las aguas y las afectaciones a los suelos debido a las intervenciones antrópicas de carácter productivo y por la construcción y puesta en funcionamiento de obras de infraestructura, destacando el impacto del megaproyecto Hidroituango.

La espacialidad denominada subregión Norte también expresa una capa escalar del conflicto armado colombiano y su reciente reconfiguración; en efecto, una lectura territorial implica entender la presencia de las bandas emergentes, la criminalidad organizada y nuevos carteles de la droga, que han reclutado antiguos combatientes del paramilitarismo y la guerrilla y que han tomado el control las principales actividades que reproducen el conflicto.

Finalmente, el análisis realizado encontró que la actual dinámica regional de la subregión del Norte también se debe entender desde el núcleo problémico que aborda la organización y la participación ciudadana, movilizadas por la defensa del territorio y los diversos modos de vida, generando procesos de resistencias y acciones colectivas. Se vienen generando procesos sociopolíticos que protestan ante los efectos económicos y socioambientales de las obras hidroenergéticas y han exigido garantías de seguridad y cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Con este volumen, *Norte. Dinámicas territoriales: aportes para la orientación estratégica de la regionalización de la Universidad de Antioquia*, se propone un análisis crítico, integrador y sintético de la subregión, que espera aportar a la gestión del conocimiento territorial, tanto a los actores universitarios como a los actores interesados en la comprensión de las lógicas territoriales del Norte y sus localidades.

Alejandro Pimienta Betancur  
Director  
Instituto de Estudios Regionales  
Septiembre de 2022



## Presentación

La lectura territorial de la subregión del Norte antioqueño está presentada por núcleos o nodos estratégicos, entendidos como articulaciones complejas de fenómenos que interactúan entre sí y los definen, configurando un campo evidente de relacionamientos entre los diversos actores del territorio que intervienen en esos fenómenos, cuyas contradicciones y tensiones, pero también, confluencias y sinergias, se concretan en prácticas y proyectos territoriales diferenciados. Los cuatro núcleos estratégicos del Norte son los siguientes:

- Disparidades territoriales, desconexiones espaciales e intervenciones económicas desiguales y especializadas han mantenido al Norte como una subregión fragmentada.
- Deterioro de ecosistemas naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de aguas y suelos producto de intervenciones antrópicas de carácter productivo y por construcción de obras de infraestructura.
- Recrudescimiento de la violencia e incremento de la criminalidad ejercida por grupos armados reconfigurados y sus disputas por el control del territorio, sus recursos y las rentas ilegales.
- Emergencia de movimientos sociales y organizaciones populares relacionadas con la defensa del territorio y la resistencia a las hidroeléctricas.

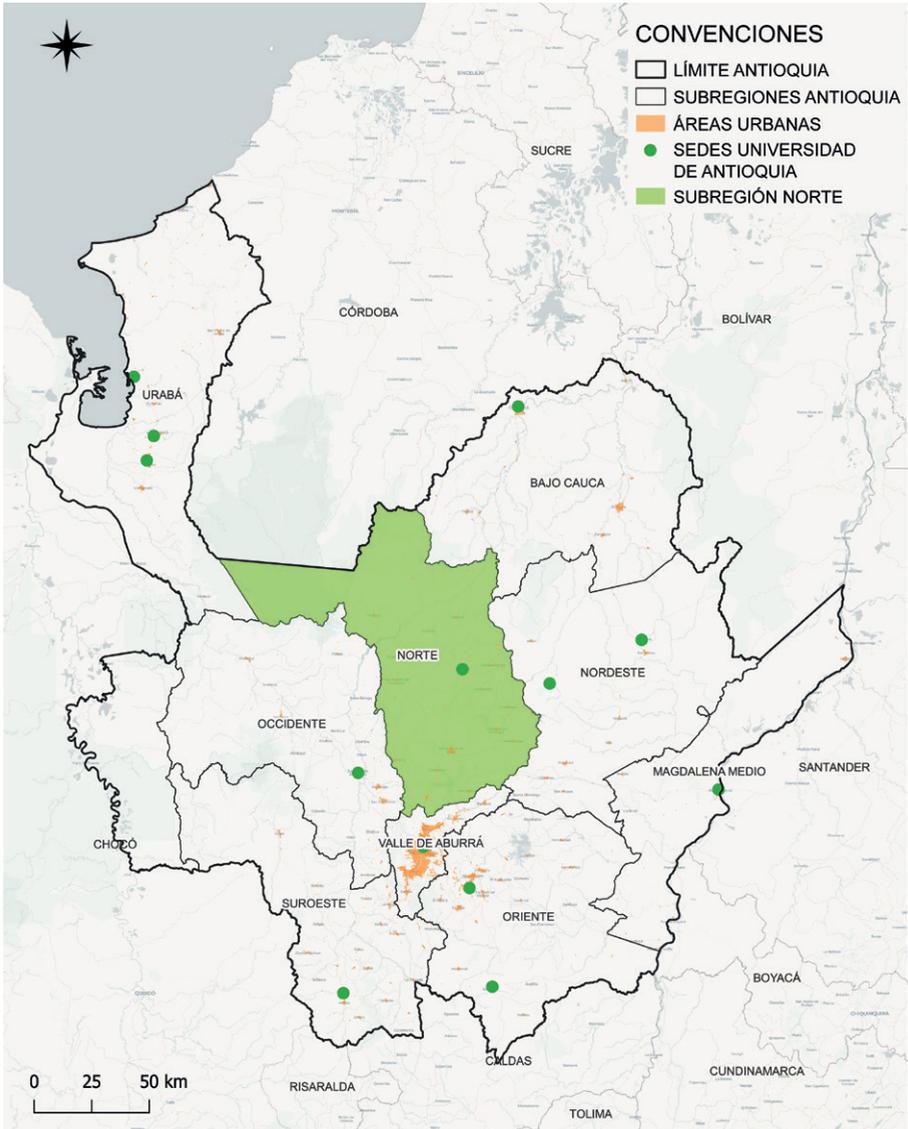
Estos cuatro núcleos, a su vez complementarios e interactuantes, presentan una realidad menos fragmentada que si interpretáramos al Norte por dimensiones sectoriales. Si un mismo elemento hace parte de varios núcleos es porque ocupa un lugar específico y tiene un peso distinto según sea la combinación compleja de fenómenos que se analiza en cada núcleo.

Comenzamos enunciando algunas de las características generales de la subregión involucradas en los nodos estratégicos. El Norte está conformado por 17 municipios. En cinco de ellos, Briceño, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña y Toledo, las cuencas hídricas encauzan sus aguas hacia la vertiente del río Cauca; en otros como Angostura, Campamento, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, Valdivia y Yarumal, hacen parte del sistema territorial estructurado por los ríos Porce y Nechí. El altiplano norte se conforma por los municipios de Belmira, Donmatías, Entreríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos.

Este territorio alberga una población de 263 742 habitantes, cifra equivalente al 3,9% de la población departamental para 2017 (6 613 063), según proyección del DANE. Predomina la población rural sobre la urbana en 10 de los 17 municipios, con excepción de Carolina del Príncipe, Donmatías, Yarumal y San José de la Montaña, donde la población urbana supera el 60% del total municipal; y Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros y Entreríos, donde esta supera levemente el 50% (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). Además de la población campesina, en su territorio se encuentran comunidades negras en Belmira, Santa Rosa de Osos, Ituango y San Pedro de los Milagros; y comunidades indígenas en Ituango.

Norte es una de las cuatro subregiones resultantes del proceso de poblamiento histórico (siglos XVII y XVIII) de Antioquia, junto con Oriente, el Valle de Aburrá, Occidente medio y Nordeste. Esta diferenciación se hace respecto de Suroeste, cuyo poblamiento es producto de un proceso de colonización decimonónica, y de Urabá,

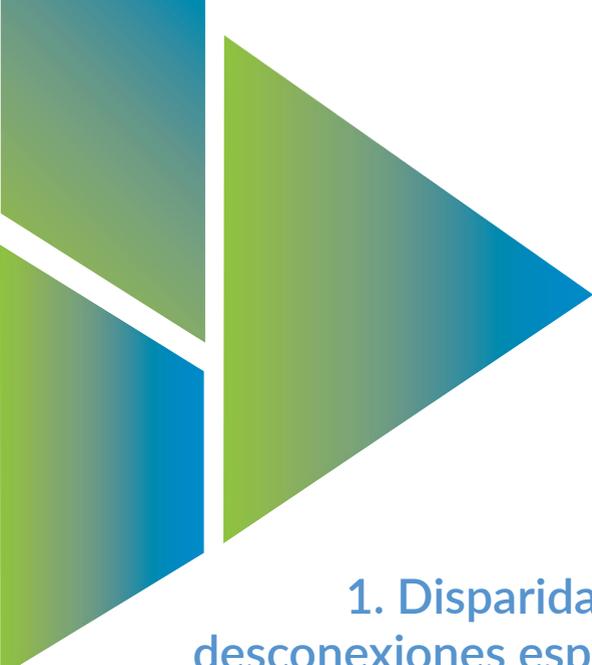
Bajo Cauca, Magdalena Medio y parte de Occidente, que obedecen a procesos de colonización reciente (siglo XX) y donde se identifican relaciones fronterizas con otras regiones del país.



Fuente: Elaboración propia.

En relación con su productividad, Norte ocupa el quinto lugar superando a Nordeste, Magdalena Medio, Occidente y Bajo Cauca, con

un aporte a la producción departamental del 3,75%. En cuanto a calidad de vida, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– de la subregión se sitúa en quinto lugar (31,6), muy por encima del promedio departamental (15,06), y al nivel de Nordeste (34,2) y Occidente (34,2). El indicador de NBI rural (53,9) está por encima del promedio departamental (44,9) y después de Norte solo siguen Nordeste, Bajo Cauca y Urabá. Este indicador muestra las notorias diferencias en materia de calidad de vida entre las cabeceras municipales y las áreas rurales de la subregión (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019).



## 1. Disparidades territoriales, desconexiones espaciales e intervenciones económicas desiguales y especializadas han mantenido al Norte como una subregión fragmentada

El aislamiento geográfico y la escasa conectividad de algunos municipios, las diferencias sustanciales entre los sistemas productivos, la ausencia de infraestructura, la preferencia por la articulación con el Valle de Aburrá y los proyectos económicos priorizados históricamente han creado fuertes disparidades territoriales en la subregión Norte, terminando por configurar cuatro zonas diferenciadas entre sí. Son ellas:

*Altiplano norte o Meseta de los Osos.* Zona integrada por los municipios de Belmira, Entreríos, San Pedro de los Milagros, Donmatías y Santa Rosa de Osos.

*Vertiente del río Cauca.* Zona compuesta por Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña y Toledo, la más desconectada del circuito regional.

*Vertiente del río Porce-Nechí o vertiente de Chorros Blancos.* Integrada por Angostura, Briceño, Campamento, Valdivia y Yarumal, siendo este el principal centro productivo, comercial y de consumo de la zona.

*Vertiente del río Porce.* La integran Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe.

En el estudio de la Dirección de Regionalización *et al.* (2007), además de los factores diferenciadores entre las cuatro zonas, se mencionan las rivalidades históricas entre algunos subcentros, la carencia de una visión integral de subregión por parte de las organizaciones sociales, la sujeción a liderazgos políticos que defienden intereses particulares, entre otras condiciones que acompañan la separación. El principal efecto de esa fragmentación se expresa en la incapacidad para hacer de la subregión un proyecto competitivo, incluyente, capaz de asumir las diferencias locales y regionales, y esas condiciones no han cambiado.

## 1.1. Vialidad, factor de integración o desintegración territorial en Norte

Dos vías carreteables han fungido como ejes articuladores para determinadas porciones del territorio, pero no lo han sido para otras, que permanecen relativamente incomunicadas. Está, de un lado, la Troncal Occidental<sup>1</sup>, factor de comunicación y articulación entre las cabeceras municipales de Donmatías, Santa Rosa de Osos, Yarumal y Valdivia, y de estas con el Bajo Cauca, Córdoba y la región Caribe (Bravo, 2010)<sup>2</sup>. La otra es el anillo vial conocido como Ruta de la

1. La Troncal Occidental es una de las troncales establecidas por el Decreto 1735 de 2001 del Instituto Nacional de Vías –INVIAS–. Inicia su recorrido en el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, y finaliza en la ciudad de Barranquilla. Esta troncal toma la mayor parte de sus tramos y ramales de la Ruta 25. Es una de las vías más importantes del país ya que es la principal vía de acceso por el sur y recorre 10 departamentos, cruzando zonas como el Valle del Cauca y el Valle de Aburrá, donde se encuentran dos de las ciudades más importantes de Colombia (Cali y Medellín). Recuperado de [https://es.wikipedia.org/wiki/Troncal\\_de\\_Occidente](https://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_de_Occidente)

2. Desde la ciudad de Medellín hacia el sur, la carretera fue reconstruida en las décadas de los años 50 y 60; hacia el norte, el sector Medellín-Tarazá-Caucasia fue construida durante los mismos años con cambios sustanciales en la vía existente. Se adelantó la reconstrucción de varios sectores logrando un mejor alineamiento

leche, cuyo origen se remonta a la construcción de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros en el año 1948; con el tiempo esta ha llegado a articular los municipios de la Meseta de los Osos (San Pedro de los Milagros, Belmira, Entreríos, Santa Rosa de Osos y Donmatías), posibilitando entre ellos la oferta y demanda de servicios y una fácil conexión con Medellín y el Valle de Aburrá. Desarticulado de estos se presenta San José de la Montaña, municipio al que en ocasiones se lo considera del altiplano y en ocasiones de la vertiente del río Cauca.

Los municipios del cañón del río Cauca (Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia) en su relativo aislamiento geográfico apenas si logran insertarse a la dinámica subregional, aun cuando es probable que las vías que construye Hidroitango para acceder a las instalaciones de la central hidroeléctrica los benefician, al igual que a Briceño, perteneciente este último a la vertiente Chorros Blancos o vertiente río Porce-Nechí. De los municipios de esta vertiente, Campamento y Angostura conservan su aislamiento y preponderancia rural pues, a pesar de encontrarse cerca de los municipios de la vertiente del Porce (Carolina del Príncipe, Guadalupe y Gómez Plata), no se han logrado articular entre ellos. Si bien, estos últimos se encuentran mucho más conectados entre sí, la construcción de la vía 4G –Magdalena 1– los dejará más cerca de Medellín, pero más distantes del Norte, subregión con la cual mantienen hoy escasas conexiones.

Aquí interesa tener en cuenta como tendencia que proyectos de infraestructura desarrollados en otras zonas del departamento, como las vías 4G, el Ferrocarril de Antioquia y los puertos de Urabá, pueden dejar a los municipios del Norte lejano, así como a los ubicados en la vertiente Chorros Blancos en las condiciones actuales de aislamiento, poca competitividad e integración regional, perdiendo

horizontal y vertical, y sacando la circulación vehicular de las cabeceras municipales (Bravo, 2010).

protagonismo la subregión Norte con respecto a las demás subregiones de Antioquia (INER, Universidad de Antioquia, 2018).

En jurisdicción de Antioquia, la Troncal Occidental ha beneficiado hasta ahora a los municipios de Donmatías, Santa Rosa de Osos, Yarumal y Valdivia. El proyecto Autopistas para la Prosperidad, que conduce del centro al norte del país, tendrá un cambio de trazado modificando la salida de Medellín por el Nordeste (Cisneros-Maceo-Remedios-Zaragoza) hasta Cauca, dejando como tramo de control el actual corredor vial (Troncal Occidental) que conecta al Norte con Cauca, lo que implicará una disminución del flujo de transporte en la zona. Los municipios más afectados serán Santa Rosa de Osos y Yarumal porque quedarán aislados del principal eje de conectividad regional. El municipio que se beneficiará será Donmatías por estar en la zona de confluencia directa del proyecto Magdalena 1 y se convertirá en punto de conexión entre el norte del Valle de Aburrá, el Norte, Nordeste y Magdalena Medio. Este tramo cuenta con una extensión de 243 km. Los demás municipios no serán partícipes del nuevo flujo comercial de transporte (Cardona Trujillo, 2019).

Históricamente, los municipios de la Meseta de los Osos se han beneficiado de la proximidad y la dinámica industrial del Valle de Aburrá para el montaje e impulso de sus industrias de confección, bebidas y alimentos. Esa proximidad y la que la subregión Norte tiene con el norte del país siguen siendo claves para que los sectores productivos de la subregión –como la producción de leche, la porcicultura, la caña de azúcar, el café y la ganadería de doble propósito– puedan comercializar sus productos en otras regiones del país y también a nivel internacional.

La reconfiguración regional girará en torno al Valle de Aburrá, lo cual se sentirá en los municipios del altiplano (San Pedro de los Milagros, Donmatías y Santa Rosa de Osos) y en los de la zona periférica central (Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Guadalupe y

Yarumal). Como la mayoría de los municipios del Norte, en especial los de la vertiente del río Cauca –Ituango, Briceño, San José de la Montaña y Toledo–, están alejados de la Troncal Occidental estos deberán buscar estrategias para integrarse de manera más dinámica (Cardona Trujillo, 2019).

En consecuencia, la subregión debe encontrar nuevas formas de potenciar su competitividad, por ejemplo, a través de la diversificación de productos y el mejoramiento de la productividad agrícola, la construcción de vías secundarias y terciarias que comuniquen los sectores de producción agrícola con los centros municipales cercanos a los mercados del Valle de Aburrá y del norte del país, lo cual mejoraría sus condiciones para el desarrollo territorial (Cardona Trujillo, 2019).

Como se ha dicho ya, el proyecto hidroeléctrico Ituango ha generado vías para acceder a las instalaciones de la hidroeléctrica, lo que beneficia a los municipios de Ituango y Briceño. Esas intervenciones, si bien conectan municipios y veredas vecinas a las obras, no suponen facilidades de conexión con los demás municipios (INER, Universidad de Antioquia, 2018).

## 1.2. Disparidades territoriales por factores económicos

Tal y como se anotó antes, las disparidades entre las zonas que componen la subregión Norte se refieren también a condiciones económicas que se maximizan cuando se les suma baja conectividad y aislamiento geográfico. Las diferencias sustanciales entre los sistemas productivos se derivan no solamente de la ausencia de infraestructura, sino también de la cercanía con el Valle de Aburrá y los proyectos económicos que se han priorizado en las zonas, todo lo cual le aporta a la fragmentación subregional.

En el *altiplano norte o Meseta de los Osos* (Santa Rosa de Osos, Belmira, San José de la Montaña, Entreríos, San Pedro de los Milagros)

se desarrollan actividades productivas como ganadería semiintensiva de leche con altos niveles tecnológicos, ganadería extensiva de leche, fruticultura altamente comercial y minería. La ganadería lechera (y de carne) con sus encadenamientos productivos en el altiplano y el paquete tecnológico asociado han producido importantes impactos ambientales.

En la *vertiente Chorros Blancos o Porce-Nechí* (Briceño, Yarumal, Angostura, Campamento, Valdivia) las actividades son la ganadería extensiva de carne y leche, la producción cañera semitecnificada y tradicional, y las economías mixtas de colonización, producción minera y caficultura semitecnificada y marginal. Esta es una zona alejada de los principales centros urbanos, con excepción de Yarumal. Aparte de las anteriores se dan economías marginales y es significativa la presencia de cultivos ilícitos (coca) (Corantioquia, 2016, citado por INER, Universidad de Antioquia, 2018).

En las zonas de las *vertientes del río Cauca y río Porce* se señala un importante déficit en las condiciones de vida de la población, aislamiento geográfico, débil presencia del Estado, déficit cualitativo y cuantitativo de servicios públicos y sociales, falta de acceso a la tierra, a la distribución de la riqueza y desigualdad social y económica (INER, Universidad de Antioquia, 2018).

Para Corantioquia y su gestión ambiental, la territorial Tahamíes es la que más municipios posee en situación *muy crítica*, de los cuales se encuentran en Norte los siguientes: Briceño, Campamento, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia y Toledo. En general, están ubicados en zonas con grandes restricciones biofísicas, donde predominan vertientes de altas pendientes, altas precipitaciones y condiciones agroecológicas muy precarias, al tiempo que se encuentran alejadas del centro urbano subregional principal, poseen una baja capacidad funcional urbano-rural y baja accesibilidad. En esta zona se han venido produciendo aprovechamientos hidroeléctricos por parte de Empresas Públicas de Medellín

–EPM–, desde la primera mitad del siglo XX, a las que se suma en la actualidad la construcción de la hidroeléctrica Ituango que genera nuevos impactos biofísicos y sociales que vienen a acumularse a otros anteriores, tal y como se verá más adelante.

Por el contrario, esta misma territorial de Corantioquia, actúa en cinco municipios en situación *acceptable*, que corresponden a los del *altiplano norte* o *Meseta de los Osos*, donde se desarrolla la ganadería lechera con mayor tecnología e importantes dinámicas económicas generadas por el establecimiento de industrias de derivados lácteos y productos cárnicos, y un sistema vial acorde con los requerimientos del mercadeo (Corantioquia, 2006), como se mencionó arriba.

### 1.2.1. Características de la actividad ganadera

Durante casi tres siglos la economía del altiplano norte se concentró en la minería del oro, teniendo como centros a Santa Rosa de Osos y Yarumal, actividad para la cual se empleó mano de obra esclava. En el siglo XIX se activó la colonización de tierras y la expansión de la frontera agrícola, especialmente en Entreríos y Angostura, dinamizándose el desbroce de tierras y el poblamiento rural con la finalidad de “montar fincas”. Posteriormente se localizó la producción de caña de azúcar en Campamento y Angostura, de café en Ituango, San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia (Arias Restrepo, 2014). Se trataba de fincas integrales donde la agricultura se combinaba con la ganadería y la producción de frutos, leguminosas y maíz.

La ganadería comenzó a ganar fuerza desde mediados del siglo XX, con la construcción de la Troncal Occidental (1948), pues se intensificó la importación de ganado caballar y vacuno desde la Costa Atlántica, y se fue generalizando con la creación de la cooperativa lechera Colanta a mitad de la década del 60 (1965). Esas fueron décadas definitivas para la sustitución de la vocación agrícola del territorio por la ganadera, hasta tal punto que a la fecha esta

subregión es la mayor productora de leche en Antioquia y se destaca incluso a nivel nacional.

En 2016 la subregión Norte reportó un inventario de 455 123 cabezas de ganado bovino en un área de 400 965 hectáreas de pastos, con una capacidad de carga de 1,13 cabezas de ganado por hectárea, correspondiente a una ganadería tecnificada de leche. San Pedro de los Milagros es el mayor productor con un promedio de 22 litros de leche/vaca/día, seguido de Santa Rosa de Osos, Entrerriós, Donmatías y Belmira (FAO & Agencia de Desarrollo Rural, 2019).

Desde la propia cooperativa lechera Colanta y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA– se promovió y acompañó el cambio tecnológico de los campesinos, hasta la adopción de un complejo y costoso paquete que privilegió la monoproducción, y un modelo económico que favorece el crecimiento y la efectividad frente a la integralidad de las fincas, la seguridad alimentaria de la población y la salud de los ecosistemas.

El paquete tecnológico asociado a la ganadería semiintensiva de leche en el altiplano norte presenta los siguientes componentes: 1) Sustitución de ejemplares vacunos criollos, cruzados y sin raza específica por ejemplares modificados genéticamente que son producto de cruces con razas europeas o africanas; 2) Alto consumo de concentrados en la alimentación como complemento del pasto, para incrementar la productividad; inicialmente se introdujo la variedad *kikuyo* como sustituto del pasto nativo, pero se encontró que es muy fibroso y no facilita la absorción de energía, por lo que se hace necesario suministrar concentrado, el cual provee energía en pequeñas partículas; la razón para introducir este pasto residió en que no necesita resiembra pues no se degrada con el tiempo y a que en aquellos momentos se necesitaba volumen de comida, no calidad (“alimentar, no nutrir”, EN01. Belmira, 7-8/10/2019<sup>3</sup>); 3) Uso

---

3. A lo largo del trabajo de campo de esta investigación se realizaron una serie de entrevistas a diferentes actores territoriales, algunas se han usado explícitamente

de fertilizantes para el tipo de pasto (*kikuyo*), dada la acidez de los suelos de la región; 4) Introducción de nuevas variedades de pastos mejorados y adecuados a las condiciones del suelo (*rey grass*, graminéa de bajo tamaño); 5) Introducción de nuevas prácticas asociadas al cuidado y manejo del ganado para garantizar la sanidad e higiene del producto, así como la comodidad (el ordeño a mano fue sustituido por el ordeño portátil y las salas de ordeño, y una rutina que consiste en limpieza de ubre y pezones, despunte, y presellado; aseo de recipientes); adopción de tanques de enfriamiento y mantenimiento de la cadena de frío; 6) Construcción de caminos cubiertos para reducir la suciedad de las ubres; 7) Evaluación de la calidad de la leche: los laboratorios de la Universidad de Antioquia contribuyen con su inocuidad, lo cual hace parte de la calidad; con base en la calidad se paga a los productores (EN01. Belmira, 7-8/10/2019).

En resumen, el paquete tecnológico busca mejorar genética, alimentación, sanidad animal, higiene y calidad de la leche. Sin embargo, de acuerdo con algunos técnicos agropecuarios de la zona, el gran problema de la lechería en el Norte es que todavía no se ha dado el salto definitivo hacia una mentalidad empresarial y no se ha tecnificado lo que se debe tecnificar, es decir, la finca misma debe convertirse en una empresa; y una de las dificultades para ello ha estado en la resistencia de los ganaderos a calcular los costos de producción del litro de leche (EN01. Belmira, 7-8/10/2019).

Los ingresos de la producción lechera les permiten a los campesinos abastecerse de productos alimenticios en el mercado, por lo tanto, según la Mesa de Seguridad Alimentaria no es común encontrar casos de desnutrición en las zonas de ganadería industrial. Sin embargo, existe dependencia de la economía lechera en el Norte: “Aquí si no es la leche, se nos olvidó hacer más cosas” (EN01. Belmira, 7-8/10/2019).

.....  
 en la construcción de este documento, aparecen marcadas con las iniciales EN (Entrevista Norte), el número que se le asignó en la fase de procesamiento de la información, seguido del lugar y la fecha en la que fue realizada.

En otros municipios del altiplano norte, como Yarumal, hay atraso con la implementación de tecnologías o paquetes tecnológicos para la ganadería, tal vez porque allá las fincas son pequeñas (10 hectáreas en promedio) y están administradas por sus propios dueños; se han insertado en las dinámicas y exigencias de las empresas compradoras de leche y esto implica certificarse en hatos libres de brucelosis y tuberculosis, tener su máquina de ordeño, entre otros elementos de infraestructura que resultan muy costosos para ellos. No se los “obliga” pero deben hacerlo para mantener la relación comercial (EN09. Yarumal, 9/10/2019).

Los municipios de la vertiente del río Porce (Gómez Plata, Guadalupe y Carolina del Príncipe) no tienen las mismas dinámicas ganaderas del altiplano. En Gómez Plata las extensiones dedicadas a la ganadería superan el 30 o 40% del territorio, pero con un uso ineficiente del suelo. Para su vecino, Carolina del Príncipe, la capacidad de carga es de 0,5 animales por hectárea, se considera muy baja (ganadería extensiva). También las dinámicas de otros renglones de la economía como el café (alrededor de 650 familias cafeteras) son diferentes y el turismo es incipiente en esta zona.

Actualmente se promueve la diversificación de la ganadería lechera para dar paso a la producción de trucha, una especie exótica e invasora que la gente ya considera “propia” y que se ha convertido en su medio de subsistencia. Belmira es el municipio más productor en la subregión por la abundancia de corrientes de agua fría que descenden del Páramo Belmira-Santa Inés, pero los cultivos de trucha reciben afectaciones por los agroquímicos derivados de los cultivos de papa que arrastran las aguas (EN01. Belmira, 7-8/10/2019).

### 1.2.2. Respecto de la agricultura

El Norte descuidó la agricultura, actividad que se concentró en el Oriente antioqueño, donde se produce la mayoría de hortalizas del departamento. A través del trabajo de las UMATA se ha

estimulado la seguridad alimentaria con base en la huerta casera, pero sus productos son solo de autoconsumo. A pesar de que existe potencial para sembrar, las dificultades residen en la comercialización y para generar un buen mercadeo se han tratado de implementar los mercados campesinos; sin embargo, el volumen de producción en cada unidad campesina no es suficiente para cubrir los costos de producción, el transporte a las plazas de mercado de los pueblos y para mantener un flujo constante de productos. Por lo tanto, los alimentos deben traerse de otras partes, lo cual “es completamente ilógico teniendo en el Norte todas las condiciones para producir” (EN01. Belmira, 7-8/10/2019). Entre las opciones para superar tal entramamiento, los técnicos agrícolas se plantean generar cooperativas de productores agrícolas, al estilo de Colanta en la ganadería; tecnificar las siembras, de modo que no sean básicas ni de autoconsumo, para asegurar el mercado para los productos; y la articulación con instituciones educativas para ofrecer formación en prácticas agrícolas y así generar emprendimientos. Esta última ha sido una iniciativa de las UMATA en varios municipios de la subregión.

Un espejo de emprendimiento agrícola es Santerra, una empresa de origen boyacense dedicada a la producción, transformación y comercialización de productos del campo –papa, zanahoria– la cual llegó al Norte en el año 2004 y estableció sus primeros cultivos en San Pedro de los Milagros; ahora está comprando predios en otros municipios de la subregión y emplea como trabajadores a las personas que antes eran sus propietarios (EN01. Belmira, 7-8/10/2019). Otra situación se refleja en la presencia desde hace algunos años de paperos del municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño, que se han desplazado a Belmira, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos por causa de la contaminación de los suelos, la violencia y el incremento que ha tenido el valor de la tierra en su subregión. Aquí alquilan tierras para cultivar papa, contratando mano de

obra local y de inmigrantes extranjeros, especialmente venezolanos (EN01. Belmira, 7-8/10/2019).

### 1.3. Generación de energía hidroeléctrica

En materia de recurso hídrico la subregión Norte ha sido identificada como una de las principales proveedoras del Valle de Aburrá y el departamento (INER, Universidad de Antioquia, 2018). Tal generalización, sin embargo, no da cuenta de la especialización de algunos municipios de la vertiente del río Porce-Nechí en ese renglón. Esta situación, como se viene exponiendo, hace parte de los factores de desconexión de esta zona con el resto de municipios del Norte.

Las hidroeléctricas que desde la mitad del siglo XX han sido construidas por EPM en el Norte y Nordeste antioqueños (Quebradona (1958), Troneras (1962), Miraflores (1968), Riogrande I y II (1996), Guadalupe I (1982), Guadalupe II y III, Porce II y Porce III (2011) y ahora Hidroitango) constituyen enclaves productivos que se han ofrecido como la supuesta “vocación” del territorio. En los municipios de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe la vocación agrícola y campesina se ha extraviado ante las expectativas de mejor vida que les han creado las regalías y las transferencias de recursos del sector energético.

Sin embargo, la mejora de las condiciones de vida que podría derivarse de los proyectos hidroeléctricos no ha pasado de ser un espejismo. De acuerdo con cifras recientes del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial –PIDARET–, la situación de pobreza y miseria por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– en Gómez Plata (39,45) y Guadalupe (48,22) están por encima del promedio de la subregión (37,46). Solo el NBI en Carolina del Príncipe (17,42) se sitúa por debajo del promedio subregional y el departamental (22,96) (FAO & Agencia de Desarrollo Rural, 2019).

Si bien para algunos observadores “... los distintos usos del recurso hídrico en la subregión Norte han sido un eje articulador y

estructurante en cuanto a la disponibilidad y las diversas estrategias de aprovechamiento que se han dado de manera constante en el territorio” (INER, Universidad de Antioquia, 2018), esa idea (del uso del recurso hídrico como factor articulador y estructurante del territorio) se debe cuestionar. Si se tiene en cuenta que la zona del Porce ha estado sometida a los intereses de EPM y a las necesidades de la ciudad de Medellín, no resulta tan claro que las hidroeléctricas hayan actuado como integradoras y articuladoras subregionales. Además, los proyectos hidroeléctricos del río Porce y ahora del río Cauca (Hidroituango) han traído efectos negativos para la población, más que beneficios, sobre todo entre los mineros, y han generado desplazamientos forzados y otros impactos sociales y políticos que serán analizados en el siguiente núcleo estratégico.

#### 1.4. Diferencias por dinámicas sociales

Un factor que marca diferencias importantes en la dinámica poblacional es la condición de aislamiento o movilidad de determinadas poblaciones y las razones que llevan a sus habitantes a migrar. Es decir, mientras más difíciles sean las condiciones de acceso o mayor sea la precariedad en la conectividad, menor será el crecimiento de la población, y esto está más relacionado con la emigración que con el crecimiento vegetativo. Municipios como San Andrés de Cuerquia, Toledo y Peque sobresalen por bajos índices de crecimiento poblacional, relacionados con desplazamientos por motivos familiares, por el conflicto armado y escasez de oferta laboral remunerada. El mayor flujo de población que se desplaza de las zonas rurales lo ha tenido Ituango, mientras San Andrés de Cuerquia y Toledo, con menor población y extensión municipal, y un acceso más directo a centros urbanos, han perdido más población por la búsqueda de trabajo y servicios de educación en cabeceras cercanas. Por su parte, Valdivia y Yarumal, localizados sobre la Troncal Occidental, muestran una

tendencia al crecimiento poblacional, fundamentalmente en sus cabeceras, facilitado por las ventajas y condiciones de conectividad. En Valdivia el rápido crecimiento tiene que ver con la natalidad y con la existencia de cultivos ilícitos (EPM *et al.*, 2011). Ituango y Yarumal son los municipios de mayor población, aunque el primero dado su enorme tamaño tiene la menor densidad poblacional (10 hab./km<sup>2</sup>) y el mayor decrecimiento entre los censos nacionales, mientras el segundo, por ser centro regional, tiene la mayor densidad (59 hab./km<sup>2</sup>) y el mayor índice de crecimiento poblacional.

Demográficamente son poblaciones estables en las últimas décadas, pero con tendencia a ser decrecientes. Sin embargo, llama la atención Gómez Plata, municipio que pasó de más de 12 000 a 8000 o 9000 habitantes, lo cual afecta la cantidad de recursos que recibe el municipio por transferencias de la nación. Hay desplazamiento de población rural, entre otras razones, por la poca tecnificación de los cultivos de café, lo que no los hace sostenibles causando expulsión del campo. Muchas familias no han logrado obtener su sustento de la agricultura porque las políticas rurales no los favorecen; por ejemplo, producir panela en bloque no es rentable lo que explica la disminución de 20 trapiches a 10; además, el gremio panelero no es fuerte y de un trapiche dependen entre 20 y 25 familias. Se reconoce la necesidad de producir derivados de la panela y como se proyecta renovar 50 hectáreas de caña es perentorio motivar esos derivados. La tendencia a la disminución de población en Gómez Plata también guarda relación con la migración campesina, producto de la venta de tierras para fines recreativos que se presenta como fenómeno reciente, dada la cercanía en la que las nuevas vías lo situarán respecto del Valle de Aburrá (EN16. Gómez Plata, 10/10/2019).

Yarumal es el municipio más grande de la subregión; allí habitan 48 000 personas. En la región norte del municipio, el 47,56% de los habitantes residen en el área urbana y el 52,44% en el área rural. La mayoría de habitantes tienen entre 0 y 29 años de edad, lo cual

representa retos importantes de generación de oportunidades para que esta población no abandone el municipio.

Así, las disparidades territoriales entre las zonas que componen la subregión Norte se dan por las bajas condiciones de conectividad y aislamiento geográfico de algunos municipios, con las diferencias sustanciales entre los sistemas productivos entre una zona y otra, no solo por ausencia de infraestructura, sino también por la cercanía al Valle de Aburrá y por los proyectos hidroeléctricos que desde el centro regional (Medellín) se han priorizado para la subregión. Los municipios situados en el área de influencia de la hidroeléctrica Ituango presentan bajos índices de crecimiento poblacional. Esto tiene como excepciones a Yarumal y Valdivia que incrementan su población. Pierden Ituango, San Andrés de Cuerquia y Toledo; Ituango y Sabanalarga, por efectos de la violencia, mientras San Andrés de Cuerquia y Toledo por falta de oportunidades de trabajo remunerado.

Finalmente, otros factores negativos para la conectividad subregional se encuentran en la alta dispersión agrícola, la alta especialización en pocos cultivos, la dependencia de la subregión del sector lechero y la falta de diversificación de los productos que permita aprovechar todos los pisos térmicos, lo que no responde a las demandas alimenticias de la población. Además, no existe una conexión eficiente entre los municipios de la vertiente del Cauca y el altiplano, lo que genera poca integración y cierta rivalidad entre las distintas territorialidades, por la falta de una malla vial que conecte los municipios, además de la pérdida de equilibrio ambiental y de la sostenibilidad entre los ecosistemas, déficit en la calidad de vida, presencia de grupos armados en el territorio con intereses económicos ilegales (AGC, ELN, Bacrim) y la disputa de estos actores por el control del territorio. Por último, los bajos niveles de cobertura, deficiente calidad y poco acompañamiento de la educación a los cambios del territorio (Cardona Trujillo, 2019).





## 2. Deterioro de ecosistemas naturales, pérdida de biodiversidad, contaminación de aguas y suelos producto de intervenciones antrópicas de carácter productivo y por construcción de obras de infraestructura

Dos tipos de conflictos ambientales se entrelazan en la subregión Norte para afectar los ecosistemas naturales y a los seres vivos: los *conflictos por uso del suelo* y los *conflictos socioambientales*, ambos con raíces en factores económico-productivos, interviniendo en los segundos las disparidades de poder (Svampa, 2012)<sup>1</sup>. Antes de comenzar, interesa hacer algunas precisiones conceptuales.

Los *conflictos por usos del suelo* están dados por la no correspondencia entre los usos actuales y los usos potenciales. Dicho de otro modo, estos conflictos son el resultado de la discrepancia entre el uso presente que los seres humanos hacen del medio natural y aquel que debería tener de acuerdo con la oferta ambiental. Se originan por diversas causas entre las que sobresalen la desigualdad

---

1. Los conflictos socioambientales están ligados al acceso, conservación y control de los recursos naturales, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos, en un contexto de asimetría de poder (Svampa, 2012).

en la distribución de las tierras, el predominio de los intereses particulares sobre los colectivos y el manejo no planificado de la relación uso-tierra en una determinada región (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– & Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2002). Los conflictos de uso pueden presentarse por sobreutilización o por subutilización. El primero afecta a tierras donde el uso actual dominante es más intenso comparado con la vocación de uso principal natural asignado a ellas, de acuerdo con sus características agroecológicas; en este caso los riesgos son la degradación de los suelos o la pérdida de sus cualidades y, por ende, de la capacidad para cumplir funciones ecológicas y sociales. Estas se asocian con la presencia de actividades agropecuarias en tierras fundamentalmente recomendadas para usos forestales de protección y para la conservación y recuperación integral de los recursos hídricos. Se presenta subutilización cuando el uso actual no alcanza la capacidad de producción óptima de las tierras y el resultado es que no se logra proveer de alimentos a la población ni satisfacer sus necesidades básicas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– & Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2002).

Los *conflictos socioambientales* presentan inicialmente las características de cualquier conflicto social: actores en disputa, controversia, oposición, acciones colectivas públicas. Adquieren el calificativo socioambiental porque se relacionan con daños y degradación del ambiente o los recursos naturales e involucran a organizaciones ambientalistas y a las comunidades directamente afectadas (Walter, 2009, citado por Campos Cabral, 2016). Martínez Alier (1992, citado por Campos Cabral, 2016) desde *El ecologismo de los pobres* puntualiza que esos daños y degradación ambientales tienen su causa en el sistema económico que exige la extracción no sustentable de recursos destinados a las metrópolis, así como la generación creciente de residuos transferidos a las periferias, por lo que los califica como ecológico-distributivos.

Los conflictos socioambientales manifiestan la contienda entre los usuarios y/o poseedores tradicionales del territorio, con aquellos que promueven proyectos de infraestructura residencial, turística, vial, energética, hidráulica o extractiva, dado que implican la modificación y redireccionamiento de la vocación y uso tradicional de los territorios, y en algunos casos implican la desaparición de bosques o áreas con algún estatus de protección ambiental, zonas de cultivo, de captura de agua y sitios arqueológicos o sagrados, entre otros. Esto forma parte de una estrategia de despojo de los “bienes comunes” (Svampa, 2012)<sup>2</sup> a través de su mercantilización y privatización, que ha derivado en la expropiación de territorios a actores rurales por causas de utilidad pública, cuyo sustento es, por un lado, la modificación de marcos normativos que regulan la propiedad social y el acceso a recursos naturales, el impulso agresivo de proyectos extractivos a partir de la disponibilidad de tecnologías que permiten obtener grandes volúmenes de materia prima en el menor tiempo posible, aunque con un alto costo ambiental, así como el embate de las formas comunitarias que permiten la regulación autogestiva del acceso colectivo y privado a diferentes bienes (Campos Cabral, 2016).

Teniendo en cuenta las dos nociones anteriormente expuestas, es posible identificar en el Norte distintos tipos de recursos o bienes comunes que están siendo afectados y puestos en riesgo por diferentes intervenciones antrópicas. Por considerarse ejes estructurantes del presente núcleo estratégico, se identifican a continuación las áreas ambientalmente protegidas y las dificultades que ellas afrontan en la actualidad, las cuales están en estrecha relación

---

2. En el contexto de los movimientos sociales los recursos naturales aparecen resignificados como “bienes comunes” que garantizan y sostienen las formas de vida en un territorio determinado; esto expresa la necesidad de mantener estos bienes fuera del mercado pues por su carácter de patrimonio natural, social y cultural poseen un valor que rebasa cualquier precio (Svampa, 2012).

con los conflictos por uso del suelo agrícola y pecuario, y las infraestructuras energéticas, de los cuales se han derivado conflictos socioambientales.

## 2.1. Áreas protegidas en Norte

El Plan de Acción de Corantioquia 2016-2019 (2016) menciona para el Norte las siguientes zonas ambientales o unidades ambientalmente homogéneas:

Tabla 1. Localización de zonas ambientalmente homogéneas. Subregión Norte

Unidad ambientalmente homogénea	Municipio donde se localiza
Corredor de áreas protegidas de la cordillera occidental	Ituango
Vertientes altas cañón del río Cauca	San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia
Alto pluvial de Ventanas	Yarumal, Briceño, Valdivia
Piedemonte colinado de Tarazá	Ituango y Valdivia
Bosque seco del cañón del Cauca	San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia
Altiplano Norte antioqueño	San Pedro de los Milagros, Donmatías, Entreríos, Santa Rosa de Osos, Belmira, San José, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Angostura
Complejo estructural Pescadero-Ituango	San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango
Cañón de los ríos Porce y Nechí	Donmatías, Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, Angostura, Campamento y Yarumal

**Fuente:** Corantioquia, 2016, p. 51.

Si bien estas áreas constituyen ecosistemas estratégicos, no necesariamente las cubre alguna figura de protección que haga parte de la política ambiental. Al presente, las áreas protegidas<sup>3</sup> en la subregión son las siguientes:

.....

3. Las Áreas protegidas son aquellas que están cobijadas por alguna figura legal que permite el amparo, resguardo o conservación de la biodiversidad existente en la actualidad para las generaciones futuras, para lo cual se necesita la acción decidida de todos los habitantes del territorio. Según la Ley 165 de 1994, artículo 2, “un área protegida se entiende como un área definida geográficamente que haya sido asignada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”.

*DMI<sup>4</sup> del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.* Ecosistema estratégico del Norte y Occidente del departamento que Corantioquia declaró como área protegida en el año 2010. Cubre 42 587 hectáreas distribuidas en los municipios de Entreríos, Belmira, San Pedro de los Milagros, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Olaya, Sopetrán y San Jerónimo. Allí se encuentra el Páramo de Santa Inés, conocido también como Páramo de Belmira, que representa un espacio de gran relevancia por su oferta hídrica y fragilidad ecosistémica, y en conjunto con toda la zona del DMI prestan importantes servicios ambientales a la región y al Valle de Aburrá. Vegetación que se encuentra: frailejones, espeletias, musgos, bromelias, orquídeas. Fauna: puma, venado, guagua, cusumbo, armadillo, perro de monte, zorro, hurón, ardilla, zarigüeya, ranas, libélulas. El municipio de Belmira en el altiplano norte, con 19 080 hectáreas, es el que posee mayor participación en el Distrito.

Es una estrella hidrográfica; las fuentes de agua que nacen allí surten acueductos de veredas, municipios y corregimientos del Norte y Occidente antioqueños. Los ríos Grande y Chico tienen allí su origen, estos surten la hidroeléctrica Riogrande II, que suministra agua potable a 1 120 000 habitantes del Valle de Aburrá. Posee páramos y bosques altoandinos bien conservados. En la zona correspondiente al municipio de Belmira existe un sendero ecológico, un mirador y una cabaña, que permiten realizar ecoturismo controlado en medio de bellezas escénicas y paisajísticas (Corantioquia, 2006). Un turismo sin control efectivo está produciendo, sin embargo, impactos no deseados en esta importante área protegida (EN04. Belmira, 7/10/2019).

Esta reserva cuenta, además, con una serie importante de lagunas de alta montaña en los municipios de Belmira (ciénaga El Morro) y San José de la Montaña (lagunas El Congo). Este sistema

---

4. Distrito de Manejo Integrado.

cuenta con plan de manejo y desde 2001 se vienen ejecutando acciones relacionadas con su conocimiento y conservación (Corantioquia, 2006).

*DMI de la Divisoria Valle de Aburrá-Río Cauca.* Está conformado por un conjunto de cordilleras que involucra a los municipios de Bello, Medellín, Itagüí, La Estrella, Caldas, Amagá, Angelópolis, Heliconia, Ebéjico, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros. Fue declarado por Corantioquia a través de la Resolución N° 267 de 2007. Corresponde al área limitada por el río Arquía con el cruce de la vía Medellín-Cali hasta el retén Dos Bocas, en una franja de un kilómetro a partir de la margen izquierda del río Cauca y de allí un kilómetro a lado y lado del mismo, hasta el municipio de Nechí, en límites con el departamento de Córdoba.

Posee suelos de alta fragilidad ecológica y susceptibles a la erosión. Esta reserva se creó fundamentalmente para impedir la expansión de actividades extractivas, principalmente la minería. Existen a lo largo del río depósitos importantes de oro y de otros minerales relevantes para el desarrollo de la industria, los cuales, según Corantioquia (2006) deben explotarse racionalmente.

*Parque Nacional Natural Paramillo.* Se encuentra ubicado en el extremo norte de la cordillera Occidental, comprende el norte del departamento de Antioquia y sur del departamento de Córdoba. En la jurisdicción de Corantioquia, la zona que pertenece al parque se localiza en el municipio de Ituango como área de amortiguamiento. El PNN Paramillo posee una gran diversidad biológica y cultural; en esta zona habitan comunidades de la etnia Embera en el resguardo indígena Embera Katío del Alto Sinú, cuyas tradiciones culturales, a pesar de tener grandes presiones, permanecen en el tiempo. Es fuente de grandes reservas hídricas que abastecen de agua y energía a una amplia zona del noroccidente del país.

Entre los objetivos del parque se tienen “conservar áreas naturales poco intervenidas para la realización de investigaciones

científicas, actividades recreativas y educación ambiental; proteger espacios productores de bienes y servicios ambientales, conservar las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge, así como las bellezas escénicas naturales y manifestaciones culturales” (Corantioquia, 2006).

*Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Paramillo.* Una de las diez zonas de amortiguación<sup>5</sup> del PNN Paramillo se localiza en jurisdicción del municipio de Ituango e involucra los corregimientos Santa Ana y Santa Lucía y 22 veredas. Fue declarada en 1998 zona amortiguadora por Corantioquia, sin embargo, en 2013 su uso no había sido reglamentado. Desde los estudios preliminares se contempló la posibilidad de coexistencia de la zona de amortiguación con zonas de reserva campesina por “las prácticas del aprovechamiento perdurable de recursos naturales con reposición y de producción agropecuaria sostenible” que los colonos en esa zona experimentan (Fundación Neotrópicos, 1997, p. 33). Sin embargo, en esa década tal posibilidad fue rechazada por el Inco-der, la misma que vuelve a ser considerada en la actualidad. Los cultivos ilícitos invaden el área de reserva, lo cual produce pérdida de las especies nativas. También se realizan prácticas de cultivo en altas pendientes que al eliminar la capa vegetal del suelo lo hacen propenso a procesos erosivos (UAESPNN, 2005).

Otra área protegida es el *Alto de Ventanas*, declarada en junio de 2018 por Corantioquia, se ubica entre Yarumal, Valdivia y Briceño. Son 23 538 hectáreas que tienen una importancia muy grande por ser corredor del puma concolor, hábitat de 145 especies de vertebrados, entre ellos pájaros que son endémicos, especies amenazadas como el loro orejiamarillo y 960 especies de flora, únicas de esta

5. Una zona de amortiguación evita el proceso de intervención del parque o área de conservación mediante la implementación de programas que brindan otras alternativas económicas a las comunidades rurales vecinas. Allí se debe estimular el desarrollo sostenible y desestimular prácticas nocivas que atenten contra la biodiversidad de las áreas de conservación, tales como introducción y trasplante de flora y fauna exótica.

región del país; además de tener abundante agua. Este DMI no es restrictivo y da la posibilidad de desarrollar actividades compatibles con el territorio.

Las áreas aledañas al *Embalse de Miraflores*, en el municipio de Carolina del Príncipe, aparecen como relevantes para la conservación de las especies endémicas amenazadas, pues allí se encuentran cinco especies no incluidas en áreas protegidas, dos de ellas en peligro de extinción. Al respecto, se señala que parte de esta área ostenta cierta figura de protección al ser de propiedad de las EPM, pero oficialmente no está cobijada bajo ninguna categoría de protección (Corantioquia, 2006).

Otra área importante es la *Cuchilla de Guanacas* la cual, a pesar de no haber hecho parte de esta priorización, es importante para los municipios de Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe (Corantioquia, 2016). Esta requiere ser declarada área protegida de carácter regional.

## 2.2. Agua, bosques y suelos bajo amenaza

El recurso hídrico, determinante para la vida en la tierra, se encuentra bajo presión en la subregión del Norte por dos flancos: los sistemas productivos y las infraestructuras. Esto es importante mencionarlo, pues las problemáticas medioambientales asociadas a la explotación, disponibilidad y la contaminación de las fuentes de agua, acceso a servicios públicos y demás tensiones relacionadas con el recurso hídrico, son una constante. El emplazamiento de proyectos como Riogrande I y II, Guadalupe, Porce II, III, Miraflores, Troneras y el proyecto hidroeléctrico Ituango, así como la generación en menor escala, representada en pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, permiten inferir que a futuro la subregión continuará recibiendo los impactos ambientales y sociales asociados a ellos.

Las fuentes de agua más representativas se localizan en la cuenca de los ríos Porce y Nechí, que se inicia con el nacimiento del río Chico, que en su recorrido cruza de norte a sur el municipio de Belmira, recorre los municipios de Entreríos y San Pedro de los Milagros para encontrarse, luego, con el río Grande en Donmatías; continúa hacia el oriente con el nombre de río Grande hasta la confluencia con el río Aburrá y a partir de este punto se denomina río Porce, el cual a su vez es afluente del río Nechí y este del Cauca. Estas grandes cuencas abastecen acueductos veredales y municipales; además, los ríos Chico y Grande surten el embalse Riogrande II, junto con la quebrada las Ánimas, embalse cuyo espejo de agua ocupa parte del territorio de los municipios de Donmatías, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Entreríos. Esta represa surte el agua de consumo de gran parte del Valle de Aburrá.

Igualmente, de acuerdo con el Plan Estratégico Subregional –PES– del Norte (Gobernación de Antioquia, 2010, citado por INER, Universidad de Antioquia, 2018) existen otros que aun cuando no son tan caudalosos contribuyen a regular los ecosistemas y al sostenimiento de la producción agrícola: Dolores, Tenche, San Pablo, San José, El Cañal, Santa Gertrudis y un gran número de quebradas.

De acuerdo con el mapa Potencial Hidroeléctrico de Antioquia, los municipios del Norte con mayor potencial son Ituango, Toledo, Santa Rosa de Osos, Campamento, Gómez Plata, Guadalupe y Carolina del Príncipe. Los municipios de potencial medio son Briceño, Yarumal, Angostura, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Belmira, San Pedro de los Milagros y Donmatías. Y solo Valdivia es de potencial bajo (INER, Universidad de Antioquia, 2018).

En el Norte tiene asiento un sistema encadenado de embalses que constituye el modelo hidráulico de generación de energía para el territorio. Se inicia en el altiplano con los embalses Miraflores y Troneras, alimentados en cadena por los ríos Nechí, Pajarito, Dolores, Concepción, Tenche y Guadalupe. El embalse Riogrande II

genera energía en casa de máquinas Tasajera, deposita el caudal en el río Aburrá, que es embalsado más abajo en Porce II; este, más el aprovechamiento del río Guadalupe en Guadalupe IV, aguas abajo embalsado en Porce III (Corantioquia, 2006). Últimamente, también, el embalse Pescadero-Ituango, que aprovecha el caudal de la cuenca hidrográfica del río Cauca, a la que se suman las condiciones geotécnicas y morfológicas que presentan las cordilleras Occidental y Central en el trayecto que va entre Sabanalarga e Ituango, que forman un relieve disectado con forma de cañón estrecho, altamente favorable y resistente para almacenar grandes cantidades de agua (Corantioquia, 2006).

### 2.2.1. Afectación de los bosques

La cobertura de bosques en Antioquia para 2015 había tenido una reducción del 35% (2 212 000 hectáreas) respecto de 1990, con una tasa de deforestación y degradación de 19 000 ha/año, la cual es alta comparada con el reporte promedio por departamento para el país (15 000 hectáreas anuales). En el Norte, el PNN Paramillo tiene reportes de deforestación en sus áreas limítrofes, donde el grado de fragmentación es alto. Otras áreas, entre las que se encuentra el Páramo de Belmira-Santa Inés y algunas Reservas Naturales de la Sociedad Civil, han incrementado su cobertura al menos en un 5% de su extensión con respecto a lo observado en 1990 (Vásquez Peinado & González Caro, 2017). Cabe resaltar que los bosques alrededor del Páramo de Belmira-Santa Inés se mantienen como bosques continuos si se hace un análisis menos restrictivo (cuadrícula de 1 km<sup>2</sup>); esto podría explicarse por las actividades de restauración que se han venido adelantando en este territorio por parte de Corantioquia y la Gobernación del departamento (Vásquez Peinado & González Caro, 2017).

Hacia la zona de la vertiente del Cauca (Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia) se presenta una tendencia a la fragmentación del

bosque natural para el establecimiento de economías mixtas de colonización, situación que afecta al PNN Paramillo en la zona de amortiguación situada en el municipio de Ituango (Corantioquia, 2016).

En la zona del altiplano norte o Meseta de los Osos las actividades productivas predominantes, como ganadería de leche semiintensiva con altos niveles tecnológicos, ganadería de leche extensiva, frutícola altamente comercial y la minería, producen deterioro de los servicios ecosistémicos, por las presiones que tales actividades ejercen sobre las coberturas de bosques naturales (Corantioquia, 2016).

Si bien el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango, actualizado en 2011 (EPM *et al.*, 2011), reconocía en su momento que en la zona del cañón del Cauca las coberturas vegetales y en especial los bosques, estaban sujetas a una fuerte presión antrópica, debido principalmente a la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción ilegal de madera y otros productos, al establecimiento de cultivos ilícitos y la minería ilegal –actividades que en conjunto ocasionan la fragmentación y destrucción cada año de extensas áreas de bosques– su construcción produjo severos impactos en el bosque seco tropical del cañón del río Cauca, que se comenzó a talar desde 2016.

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados en el país. Según el Instituto von Humboldt,

originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones de hectáreas, de las cuales queda en la actualidad apenas un 8%. Lo más preocupante es que tan sólo el 5% de lo que queda, es decir el 0,4% de lo que había, está presente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De ahí que el Ministerio del Medio Ambiente lo haya declarado como un ecosistema estratégico para la conservación (Ramírez, 2016).

De otra parte, los municipios de Angostura y Carolina del Príncipe, en Norte, Giraldo en el Occidente y Yalí en Nordeste, han recuperado más del 50% de su extensión en cobertura en bosques

comparada con la observada en 1990 (Vásquez Peinado & González Caro, 2017). Estos mismos autores señalan que la recuperación de los bosques a corto o mediano plazo es posible, con un apropiado manejo del territorio y si se mantiene como directriz la conservación de los ecosistemas estratégicos, los corredores biológicos y la maximización de los servicios ecosistémicos importantes para las ciudades de Antioquia (Vásquez Peinado & González Caro, 2017).

En resumen, la pérdida del bosque es otro de los problemas ambientales en el territorio de la subregión Norte. Su destrucción trae como consecuencias el empobrecimiento de los ecosistemas por pérdida de biodiversidad, de la capacidad productiva de los suelos y la regulación de los ciclos naturales del agua; además, disminuye sus posibilidades de uso y aporte de bienes y servicios al hombre (Corantioquia, 2016).

### 2.2.2. Acciones de recuperación: reforestación, programa BanCO<sub>2</sub> y zonificación

Como parte de las estrategias de conservación y mejora en la disponibilidad y consumo de recursos naturales, asociadas a los bosques y áreas protegidas de la subregión, el programa de pago por servicios ambientales a las comunidades conocido como BanCO<sub>2</sub> se viene implementando con buena aceptación. Gómez Plata tiene 110 familias beneficiadas y es el segundo municipio de Antioquia con más inversión en este programa. De acuerdo con algunos funcionarios del sector agrícola, “esto ayuda, pero también es un arma de doble filo, pues hay gente que presiona cortando bosque si no se les paga” (EN16. Gómez Plata, 10/10/2019).

El programa BanCO<sub>2</sub> fue creado en 2012 por Cornare y es operado por Masbosques. Se trata de un mecanismo local de retribución económica por servicios ambientales generados para la conservación y restauración de bosques en fincas en zonas de interés ecosistémico, a través de un fondo ambiental especial financiado de

manera voluntaria por empresas y/o personas que generen emisiones de Gases de Efecto Invernadero –GEI– u ocasionen alteraciones en los ecosistemas naturales (Vásquez Peinado & González Caro, 2017). Al que se suman la Gobernación de Antioquia, Corantioquia y el municipio donde esté el programa. Esas iniciativas municipales y departamentales se deben integrar con niveles nacionales e internacionales.

Anteriormente, a los municipios se les obligaba a invertir dinero para comprar predios destinados a la conservación de fuentes de agua abastecedoras de acueductos, pero ninguno cumplía. Esto no solo obedecía a la falta de voluntad política, sino también a los trámites que eso demandaba. Para evitar esos problemas fue expedido el decreto de compensación por servicios ambientales.

Otro proyecto que se implementa en el DRMI<sup>6</sup> Belmira-Santa Inés es la compra de predios que se encuentren por encima de 3000 m s. n. m. que están enrastrados con bosques altos, y por ley los propietarios no los pueden tocar. Se desarrolla también el proyecto Cuenca verde, un fondo para la protección del agua (EN04. Belmira, 7/10/2019). En esa dirección se orienta también la zonificación de áreas que se derivan –en parte– del Plan de manejo del DMI y del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia –POTA–. El Páramo de Belmira se encontraba hace 40 años con ganadería y minería, y aunque actualmente no se está expandiendo frontera agrícola, la tendencia es a aumentar el área de protección del Páramo, aun cuando la ganadería lechera es permitida porque se encuentra en zona de uso sostenible.

La propuesta de actualización del DMI del año 2015 disminuye el área de producción, aprovechamiento o uso sostenible de 7000 a 100 hectáreas. Tal situación ha generado preocupación en el sector lechero y las administraciones municipales porque, afirman,

.....  
6. Distrito Regional de Manejo Integrado.

“nosotros no podemos vivir del ecoturismo, no estamos preparados, no está la infraestructura, no están los servicios, falta política para este tema.” A Belmira le empezaría a beneficiar la actualización del POTA de 2015 (que incrementa las áreas de protección) cuando se empiece a pagar lo que se debe por servicios ambientales, ya que lo que se paga ahora no alcanza a ser la tercera parte de lo que produce al mes una hectárea en leche (EN01. Belmira, 7-8/10/2019).

Con la Alianza EPM-PNUD<sup>7</sup>, financiada por EPM y ejecutada por Naciones Unidas (PNUD) y construida con la mayoría alcaldes de los municipios que hacen parte la cuenca del río Porce (Belmira, Donmatías, Entreríos, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Amalfi, Angostura, Anorí, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe y Yolombó), se han tratado de hacer compensaciones de otro orden (CECODES, 2017). Para el municipio de Gómez Plata, por ejemplo, se han logrado proyectos silvopastoriles piloto, proyectos de guayaba, apicultura, fortalecimiento de paneleros, fortalecimiento comunitario con Juntas de Acción Comunal –JAC–, proyecto turístico en El Salto (rutas camineras planeadas con las comunidades). Antes de esto la reforestación que hacía EPM consistía en sembrar árboles sin adelantar procesos comunitarios, sin utilizar especies adecuadas y sin los seguimientos necesarios. Todavía, a pesar de lo que se está haciendo, los ecosistemas no logran restaurarse.

### 2.2.3. Afectaciones por uso de agroquímicos

La principal amenaza que enfrenta el medioambiente en el Norte es la ganadería a causa de la expansión de la frontera agrícola y el irrespeto de los retiros de las fuentes hídricas. También, y muy

7. Esta alianza adelanta estrategias orientadas a lograr un desarrollo sostenible: 1) Mejorar el desempeño económico de las áreas rurales para reducir la pobreza y la inequidad. 2) Instalar y desarrollar capacidad social e institucional para atender los retos sociales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina. 3) Generar condiciones que favorezcan el uso adecuado y la conservación de bosques y ecosistemas estratégico (CECODES, 2017).

especialmente, los cultivos de papa y tomate de árbol producen efectos ambientales adversos debido al alto uso de agroquímicos que introducen cambios físico-químicos en el agua, por los arados agresivos de los suelos y las siembras en los retiros de las fuentes hídricas. Como se ha planteado ya, los cultivos de papa fueron trasladados al Norte por paperos del Oriente antioqueño, donde han sido replicados por campesinos. Las talas y quemas de bosques y rastrojos para instalar los cultivos de papa anteceden a la adecuación de nuevas áreas de pastos para la ganadería. Estos cultivos son altamente contaminantes de suelos, aguas y aire. Los municipios más afectados por las paperas y tomateras son Enterríos, Donmatías y Santa Rosa de Osos.

Otra amenaza ambiental son los lixiviados derivados de la cría de cerdos y el uso de porquinaza como abono para los cultivos, especialmente en Donmatías. De continuar estas situaciones

[l]a presión por el uso del suelo y la colonización por parte de las actividades como la minería, la ganadería extensiva y la degradación paulatina de bosques y cuerpos de agua, posiblemente terminen por comprometer la seguridad alimentaria de la población de la zona y por agravar la situación en materia medio ambiental y social (INER, Universidad de Antioquia 2018, p. 57).

#### 2.2.4. Afectaciones por actividad turística

En el Páramo de Belmira el turismo está desbordado y genera contaminación. No se tiene control del número de personas que ingresan porque hasta ahora no existen restricciones para ello, únicamente se exige tener un guía local por cada 10 personas, pero muy pocos visitantes lo cumplen. No existe un estudio de capacidad de carga y la sobrecarga del turismo está siendo una amenaza para este DMI; si no se controla esta situación, el páramo puede desaparecer (EN04. Belmira, 7/10/2019). Para ello se está actualizando el Plan de Manejo Ambiental.

En la zona de la vertiente río Porce-Nechí la población ha decrecido y hay procesos que en un futuro cercano pueden acentuar el cambio demográfico, tales como la construcción de la vía 4G Magdalena 1, pues con ella va a disminuir el tiempo de viaje a la ciudad de Medellín. Eso implica que esta zona se vuelve atractiva para gentes del Valle de Aburrá que deseen instalar segundas viviendas. El mercado de tierras se ha incrementado en Gómez Plata, por ejemplo, y las familias que venden las fincas posiblemente se van para la ciudad o para otros pueblos, dejando las veredas desoladas. Urbanizadores compran las fincas a bajos precios para parcelarlas y venderlas después multiplicando el dinero invertido (EN16. Gómez Plata, 10/10/2019). Este fenómeno incidirá en la oferta de servicios ecosistémicos que ya es limitada, pues el incremento de personas que se conecten a los acueductos municipales podría producir conflictos por el uso del agua; un ejemplo de ello es que hoy hay personas externas que se conectan a acueductos comunitarios, pero estos permiten un número limitado de usuarios.

Otros problemas que se viven en la región con la dinámica turística son la disposición de residuos sólidos, los vertimientos o aguas negras, pues los municipios son planos y las escasas pendientes no permiten que algunas zonas se conecten a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR–, así como la necesidad que se generaría de instalar pozos sépticos que la gente no sabe cómo utilizar. En esa población que llega no hay sentido de pertenencia con el territorio, lo que pase en el municipio no les interesa ni los afecta; además hay “costos ocultos” y problemas de otro orden como la prostitución y la inseguridad (EN16. Gómez Plata, 10/10/2019).

### 2.2.5. Minería en el sistema de páramos

Por el estímulo reciente que ha recibido la minería, este renglón de la economía es otro factor más que amenaza el medioambiente en la subregión. En Briceño y Yarumal la minería de oro es muy fuerte.

En el DRMI Belmira-Santa Inés, el sistema de páramos que surte agua para el Valle de Aburrá, Occidente y Norte medio, existen concesiones de títulos mineros, incluso a empresas extranjeras. La empresa Nueva California S.A. de capital canadiense posee un título minero en zona de páramo (2000 hectáreas) que no está activo, pero tiene todos los papeles en regla. Esta empresa efectuó algunas actividades de exploración, pero no adelantó actividad minera y finalmente se fue. Estas concesiones se hicieron en 2007 y el Plan de Manejo del DMI es solo de 2010. Otras personas alegan tradición sobre minas antiguas de socavón o veta, las cuales están activas en este DRMI Belmira-Santa Inés, y no se muestran dispuestas a abandonarlas.

#### 2.2.6. Reforestación comercial

También en el altiplano o Meseta de los Osos (Yarumal, San Pedro de los Milagros, Donmatías, Entrerríos), Angostura (vertiente de Chorros Blancos) y Carolina del Príncipe (vertiente del río Porce) se encuentra una serie de bosques plantados de pino pátula, eucalipto y ciprés que han venido aumentando sus áreas como monocultivo que buscan satisfacer la demanda comercial de madera en las ciudades (Corantioquia, 2016). También en Gómez Plata y los demás municipios de la vertiente del río Porce-Nechí hay extensas áreas sembradas en eucalipto y pino.

La empresa Tablemac cuenta con 1800 árboles por hectárea que saturan de agroquímicos para acelerar su crecimiento; además, no genera empleo local, pues trae la mano de obra de afuera y no hay aprovechamiento en el lugar; enormes carros madereros sacan el producto de los municipios (hacia la planta Duratex situada en Yarumal, actualmente de capital brasilero) y tienen vía libre para circular por las calles de los sectores urbanos produciendo daños en las calles, que no reparan. Es decir, no es una empresa amigable con el medioambiente. Frente a empresas como estas las autoridades ambientales

(ICA y Corantioquia) tienen exigencias muy básicas: respetar retiros de fuentes de agua, manejo adecuado de maquinarias, pero esto no es suficiente para enfrentar el problema.

Se requieren viveros comunitarios, enseñar a cultivar árboles, hacer aprovechamientos sistemáticos y bien planeados, no sacar madera en tiempos de invierno, dar valor agregado *in situ*. “Ellos se volvieron un enemigo para las comunidades, cuando podrían ser el mejor aliado” (EN16. Gómez Plata, 10/10/2019).

### 2.3. Conflictos socioambientales

Si bien el reconocimiento de los impactos sociales y ambientales resultantes de la construcción de las infraestructuras hidroeléctricas en nuestro país es relativamente reciente (años 80 en adelante), este ha sido posible gracias a las movilizaciones sociales, pues parece ser que la confrontación es el único modo en que los pobladores afectados logran hacerse escuchar de las empresas propietarias de los proyectos, pues históricamente ellas se han empeñado en desconocer los impactos que sus proyectos generan: sobreexplotación de la naturaleza e irrespeto social.

En el Norte los aprovechamientos hídricos (caídas, embalses e hidroeléctricas) se iniciaron en la primera mitad del siglo XX<sup>8</sup>, pero sus impactos se minimizaron. A pesar de ello, las grandes obras de infraestructura en el Norte generaron impactos, tanto en el medio natural como en el social y estos son visibles todavía, especialmente en los municipios que hacen parte de la zona de la vertiente del río

8. Las principales obras de infraestructura en el Norte son las hidroeléctricas que desde la primera mitad del siglo XX han sido construidas por las Empresas Públicas de Medellín –EPM– (Cadena de embalses de Riogrande I y II, y Guadalupe. En décadas recientes sobresale la construcción de Hidroituango con sus efectos socioambientales en el Norte, especialmente en los municipios de Ituango y Toledo, pero no solamente allí.

Porce-Nechí. Actualmente se están produciendo nuevos impactos en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.

Los impactos que recibieron las poblaciones del Porce se pueden resumir en llegada de población flotante, cambios de la vocación productiva tradicional y daños a la infraestructura de servicios, esto último exclusivamente en Carolina del Príncipe. En la década del 80, por la construcción de los embalses Miraflores y Troneras, Carolina del Príncipe recibió 5000 nuevos habitantes en la zona urbana, y con ellos, impactos sociales tales como drogadicción y embarazos adolescentes; con toda esa población flotante el costo de la vida subió y las calles que eran en piedra resultaron deterioradas (EN17. Gómez Plata, 11/10/2019). Pero en esa época EPM no estaba obligada por ley a compensar los impactos.

Según lo recuerda un líder ambiental de la zona, debido a la localización de la cabecera, el sedimento del embalse generó la colmatación de las salidas de los alcantarillados que debieron trabajar a presión, pero como las tuberías no habían sido fabricadas para soportar dicha presión se rompieron, las calles se empezaron a hundir y las aguas residuales se empozaban en el pueblo. Alcaldes y concejales pidieron ayuda a EPM, la cual se demoró una década en reconocer su responsabilidad por esos daños. En lugar de hacer salvamento del pueblo la empresa pretendía reubicarlo, pero el proceso se ganó a favor del municipio y se adoptó la primera propuesta. La situación era compleja: altas pendientes, longitudes largas de las quebradas que atraviesan el casco urbano y material del lecho descompuesto con material de arrastre. Eso se debía corregir para salvar el pueblo por lo que se diseñaron, entonces, las obras que impidieran el aporte de sedimentos en las quebradas, se crearon dos grupos precooperativos, más o menos de 80 personas, que estuvieron trabajando con las obras pertinentes (EN17. Gómez Plata, 11/10/2019).

Con respecto a la vocación productiva, en Carolina del Príncipe era importante la producción de calzado, pero esto se abandonó

cuando se iniciaron los proyectos hidroeléctricos, pues las gentes no quisieron volver a las economías familiares; la presencia de EPM creó nuevas expectativas de trabajo y empleo. Durante varias décadas la casi totalidad de la población de la zona estuvo vinculada de alguna manera a los proyectos hidroeléctricos, y la vocación económica del territorio se transformó. En Gómez Plata se dedicaron a la ganadería, pero esta actividad no generó los empleos requeridos. Mientras EPM permaneció allí, todas las necesidades colectivas parecían estar resueltas, lo que terminó por producir dependencia hacia la empresa en la población.

También Gómez Plata sufrió impactos por esos proyectos. El principal es que los mineros no fueron debidamente compensados. Aun cuando hoy en día EPM ha reconocido los impactos que generó y busca compensar a las comunidades rurales (Vega Botero, El Brasil, El Salto, entre otras), se han intentado impulsar distintos proyectos (cultivo de caucho, estanques piscícolas, ganadería, cacao) pero estos no han dado resultado, pues las personas vuelven a sus labores en las minas como barequeros.

Pese a los impactos sociales y ambientales mencionados, no puede desconocerse que los recursos que ahora reciben los municipios de Carolina del Príncipe y Gómez Plata por regalías por servicios de energía son abundantes, pero la pregunta por los “costos ocultos” de estas obras hidroeléctricas sigue vigente y no se debe perder de vista.

En la actualidad, las licencias para la construcción de hidroeléctricas y embalses las otorga la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–. Corantioquia hace control y seguimiento de los impactos y cobra una tasa por uso de agua, pero desde su perspectiva no hay impactos ambientales con los embalses del Norte. Recientemente, sin embargo, se ha descubierto que los espejos de agua pueden generar cambios climáticos o ambientales en el área de influencia, y que en los viejos embalses se produjeron cambios ambientales que también fueron notorios en su momento.

### 2.3.1. Afectaciones por Hidroituango

Las obras principales de este proyecto comprometen de manera directa terrenos de los municipios de Ituango, Toledo y Briceño, la cuenca inmediata del embalse incluye además terrenos de los municipios de Peque y Buriticá por la margen izquierda, y de Sabanalarga y Liborina por la margen derecha; además, inunda completamente los poblados de Orobajo (Sabanalarga) y Barbacoas (Peque). Asimismo, desde la perspectiva del EIA<sup>9</sup>, “la zona corresponde a un cañón profundo, estrecho y escarpado caracterizado por su escasa productividad agrícola o ganadera y su baja densidad poblacional” (EPM *et al.*, 2011). Detrás de esta frase parece que muchos de los errores e injusticias de los proyectos del pasado contra la población del Porce se repitieron con la construcción de este nuevo proyecto.

De nuevo, los mineros no fueron indemnizados justamente, pues los censos desconocieron las especificidades de la población agrominera del territorio. “Vinieron a censar a los mineros y nos dijeron que no éramos mineros fijos, entonces no nos dieron nada” (Ramírez, 2016).

El área de influencia de Hidroituango se encuentra conformada por cuatro zonas de vida. *Bosque seco Tropical* (bs-T) que se extiende desde el municipio de Santa Fe de Antioquia hasta la desembocadura de las quebradas Mote por el occidente y Santa María por el oriente; luego sigue una franja de transición a *bosque húmedo Tropical* (bh-T) que llega aproximadamente hasta la desembocadura del río San Andrés, en la que los hábitats terrestres presentan elementos de flora de ambas zonas de vida; el bosque húmedo Tropical comienza a partir de las quebradas Valdivia y La Fea en inmediaciones del municipio de Valdivia. En las vertientes medias, entre los 1000 a 2000 m s. n. m., se localizan áreas de la zona de vida *bosque muy húmedo Premontano* (bmh-P), la cual se caracteriza por

.....  
9. Estudio de Impacto Ambiental.

tener precipitaciones entre 2000 y 4000 mm anuales; con este mismo régimen de lluvias, en las vertientes altas sobre los 2000 m s. n. m., se presenta el *bosque muy húmedo Montano Bajo* (bmh-MB) (EPM *et al.*, 2011).

Según el mismo EIA de Hidroituango (EPM *et al.*, 2011), en el área de influencia del proyecto las coberturas vegetales y, en especial los bosques, están sujetas en la actualidad a una fuerte presión antrópica, debido principalmente a la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción ilegal de madera y otros productos, al establecimiento de cultivos ilícitos y la minería ilegal, actividades que en conjunto ocasionan la fragmentación y destrucción cada año de extensas áreas de bosques.

La oferta de bienes y servicios ambientales es alta en el municipio de Ituango, media en Donmatías, Santa Rosa de Osos, Valdivia y Yarumal (Cardona Trujillo, 2019). Pero por las condiciones geológicas de la zona, la deforestación producida por el llenado del embalse, el proyecto representa un factor de erosión e incrementa los impactos por deforestación y afectación de fuentes hídricas.

Por la emergencia ocurrida en los túneles de desviación y la inundación de la casa de máquinas en 2018, los constructores del proyecto Hidroituango tuvieron que frenar el caudal del río Cauca generando problemas de tipo ambiental aguas abajo en los municipios de Valdivia y Tarazá.

De acuerdo con el estudio reciente de Cardona Trujillo (2019, p. 6), EPM a través de megaproyectos como Hidroituango ha demostrado su falta de visión equitativa, ecológica y sostenible en su ejecución, lo que ha comportado no solamente un daño irreparable en la cuenca del río Cauca y su ecosistema, denunciado desde antes de su inicio por el Movimiento Ríos Vivos, entre otros grupos de ciudadanos, sino también una situación de marginalidad económica, desplazamiento forzado de amplios grupos poblacionales y una amenaza latente de emergencias humanitarias, cuyo impacto

todavía es imposible de calcular debido a los diferentes riesgos que enfrenta el proyecto.

Durante los últimos años EPM se ha convertido en un grupo empresarial de carácter transnacional de origen público, con presencia en distintos países de Latinoamérica y Europa, que actúa bajo la lógica del lucro, la ganancia y la acumulación de dinero, lo que la ha llevado a incurrir en la sistemática violación de derechos para sacar adelante sus emprendimientos empresariales. De acuerdo con Ríos Vivos, “estas violaciones e irregularidades no son evidentes en Colombia dada la connivencia de las instituciones del Estado y los vacíos de la legislación colombiana en materia de derechos y la falta de garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado frente a los megaproyectos hidroeléctricos” (Movimiento Ríos Vivos, s. f.).

Mientras EPM se mantuvo como una empresa pública municipal de servicios, su finalidad e intereses eran armónicos con los intereses públicos y colectivos, aun cuando sus actuaciones (que podrían ser denominadas de “colonialismo interno”) agenciaron la subordinación de las demás subregiones del departamento a la ciudad capital, Medellín, a sus necesidades e intereses. En diferentes momentos de la historia del siglo XX esto le granjeó a EPM animadversión en los territorios, situaciones que fueron desestimadas por la empresa que adoptó una postura tecnocrática, ciega y arrogante. Pero desde que se convirtió en un grupo empresarial transnacional, EPM adoptó, además, el modelo extractivista (Gudynas, 2011)<sup>10</sup> que, a través de la apropiación del agua, un bien común, busca lucros y ganancias desmedidas sin importar los efectos sociales ni ambientales de sus proyectos.

.....  
10. El extractivismo corresponde a enormes volúmenes de bienes naturales que, bajo prácticas intensivas –facultadas por el Estado– son consideradas como materias primas y son exportadas a los mercados globales (Gudynas, 2011).

De acuerdo con la revisión hecha del Estudio de Impacto Ambiental –EIA– actualizado de Hidroituango, contratado por EPM con las empresas Integral S.A. y Solingral (2011), de los 29 impactos identificados siete afectan el componente físico, igual número (siete) afectan el componente biótico y quince inciden sobre el componente social. Del total, solo tres son calificados como positivos, los demás como negativos y además acumulativos, es decir, sus efectos se suman a los ya existentes, lo cual intensifica el nivel de las afectaciones (Movimiento Ríos Vivos, s. f.)<sup>11</sup>.

En términos socioculturales, el represamiento del Cauca afecta sobre todo a los grupos humanos que históricamente han dependido de la extracción de oro del río (barequeros<sup>12</sup>),

por lo que la organización Ríos Vivos Antioquia buscó su protección y la defensa de sus derechos culturales apelando al Ministerio de Cultura pero éste se ha negado a proteger esta manifestación cultural inmaterial argumentando que la cultura no es un

11. “Los impactos negativos según EIA son: contaminación del aire, contaminación del agua superficial y subterránea, cambios en la calidad del agua del embalse, cambios en la dinámica fluvial del río Cauca, modificación de las propiedades físicas y químicas de los suelos (calificado como significativo), modificación del paisaje, cambios en la cobertura vegetal, pérdida o fragmentación del hábitat, muerte y desplazamiento de especies faunísticas, aumento de la presión por los recursos naturales, cambio en la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la cuenca del río Cauca, cambios en la estructura del biotopo y comunidades bénticas, proliferación de vectores de enfermedades, transformación de ambientes lóticos a lénticos, afectaciones sobre los yacimientos arqueológicos identificados, transformación de los sistemas culturales de la población afectada (calificado como muy significativo), desplazamiento involuntario (forzado) de la población y afectación de sus condiciones de vida (calificado como muy significativo), generación de expectativas, afectación de infraestructura, afluencia de población foránea, incremento en la demanda de servicios públicos y sociales, generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto, alteración de la economía regional (calificado como muy significativo)” (Ríos Vivos, s.f.).

12. El barequeo es un modelo de vida tradicional en el que la explotación de los depósitos aluviales auríferos del río se adelanta mediante técnicas manuales (uso de bateas). El barequeo constituye la principal actividad económica de subsistencia de estos pequeños grupos de parientes.

derecho fundamental y que por ser comunidades analfabetas no tienen la posibilidad de auto reconocer sus formas de vida. (Movimiento Ríos Vivos, s. f.)

Si bien lo más visible durante estos años han sido las denuncias públicas de los líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia sobre los impactos del proyecto hidroeléctrico Ituango, la población afectada también ha protagonizado diferentes manifestaciones, entre ellas una movilización en Puerto Valdivia en mayo de 2018 por el represamiento ilegal del río Cauca, que causó una abrupta disminución del caudal aguas abajo y la inundación del territorio aguas arriba del muro, la cual fue liderada por la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia –AMPA–. Líderes del Movimiento opositor a la represa han tenido que huir de Ituango y de Sabanalarga. Se han presentado múltiples amenazas individuales y colectivas, ataques y persecuciones, lo que dio lugar a la conformación de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos –ASVAM– El Aro en 2018.





### 3. Recrudescimiento de la violencia e incremento de la criminalidad ejercida por grupos armados reconfigurados y sus disputas por el control del territorio, sus recursos y las rentas ilegales

Por sus características geográficas, su relación con la Costa Caribe, la conexión con el sur del departamento de Córdoba y con la subregión de Urabá, el Norte antioqueño ha sido considerado de importancia para los grupos armados.

Esta zona ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado, especialmente desde la década de los años 80 pues la presencia de grupos guerrilleros y de paramilitares ha sido intensa.

Durante el periodo de 10 años comprendido entre 1985 y 1995 coexistieron grupos guerrilleros (FARC y ELN), de autodefensa, paramilitares (ACCU) y Ejército (IV brigada y batallón Pedro Nel Ospina). El periodo entre 1996 y 1998 estuvo marcado por el avance de los grupos de autodefensa y paramilitares sobre el territorio, desde los municipios de Valdivia, Yarumal, Campamento y Guadalupe. De 1999 a 2004 las disputas entre guerrillas y autodefensas continuaron, especialmente en el PNN Paramillo, pero la intensidad de las acciones armadas se redujo, pues las FARC disminuyeron sus ofensivas (“repliegue estratégico”), el ELN retrocedió, los

paramilitares se desmovilizaron sin que necesariamente desaparecieran totalmente sus acciones. De esos años, entre 1999 y 2002 llegó el Bloque Metro que fue relevado violentamente por el Bloque Cacique Nutibara y por el frente Mineros en Gómez Plata. “Los paramilitares con el Bloque Metro asesinaron a muchas personas entre 2002-2007; ellos no estaban atacando a la guerrilla, sino que se dedicaron a extorsionar y a quitarle los bienes a la gente. Después vino el Bloque Mineros y sacó al Bloque Metro, luego se fueron y nunca más volvieron” (EN15. Gómez Plata, 11/10/2019). Tanto guerrilla como paramilitares tenían relación con la coca (compraban, dejaban sembrar y cobraban un porcentaje) y el ELN tenía en el oro su principal fuente de financiación. A partir de 2002, con el Gobierno nacional de Álvaro Uribe Vélez, las fuerzas armadas parecieron retomar la iniciativa de la confrontación armada (Dirección de Regionalización *et al.*, 2007).

Hasta el año 2006 la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU– Nodo Antioquia (2017) señala la continuación de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH–: masacres, asesinatos selectivos, amenazas, hostigamientos, empadronamientos y confinamientos por parte de los paramilitares, fuerza pública y guerrillas. Después de 2007, las cifras de agresiones descendieron, pero en los 17 municipios se siguieron reportando graves violaciones a los derechos humanos y continuó la actuación de los grupos paramilitares (INER, Universidad de Antioquia, 2018).

Con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en el año 2016, la expectativa de un importante sector de la población colombiana era que se adelantaría un proceso de reformas significativas, que permitiría reconstruir los territorios profundamente afectados por el conflicto y le devolvería la confianza en el futuro del país. Sin embargo, la mayoría de la población del Norte no compartía, al parecer, tales expectativas.

Es necesario tener en cuenta que de los cuatro municipios del departamento de Antioquia que mayor votación obtuvieron por el No en el plebiscito por la paz, en octubre de 2016, dos pertenecen a la subregión Norte, San Pedro de los Milagros (74,3%) y Donmatías (73,9%)<sup>1</sup>; también ganó el No en Yarumal, Angostura, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Belmira y Entreríos. A favor de aprobar los Acuerdos se obtuvieron resultados en Ituango, Valdivia, Briceño, Toledo, Campamento y Guadalupe (González Posso, 2016), paradójicamente, en tres de los municipios que vivieron con mayor rigor las implicaciones de la guerra.

En este territorio, como en el resto del país, sucedió que, producto de la polarización política, los vacíos en la implementación de los Acuerdos y, en general, la escasa voluntad para su cumplimiento por parte del Gobierno nacional elegido en 2017, los espacios dejados por la guerrilla desmovilizada no fueron ocupados por las fuerzas del Estado. Esto posibilitó que bandas emergentes del paramilitarismo y la guerrilla, nuevos carteles de la droga y la delincuencia común tomaran el control de dos actividades fundamentales que han sido motores del conflicto armado: los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

Después de eso la situación ha continuado complejizándose. En los últimos meses del año 2018 se reportó en la zona Norte el incremento de amenazas y asesinatos selectivos de líderes sociales (INER, Universidad de Antioquia, 2018); además, se incrementó el

.....  
1. San Luis, en el Oriente, fue el municipio de Antioquia que mayor votación alcanzó por el No en el plebiscito de 2016 (75,07%). El cuarto fue Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio, (73,7%), ambos con una larga y cruenta historia de violencia paramilitar. La relación general para Antioquia fue de 62,0% por el No frente a 37,99% por el Sí. Recuperado de [https://elecciones.registraduria.gov.co/pre\\_plebisc\\_2016/99PL/DPLZZZZZRG\\_L1.htm](https://elecciones.registraduria.gov.co/pre_plebisc_2016/99PL/DPLZZZZZRG_L1.htm)

número de personas afectadas por desplazamiento forzado<sup>2</sup>. Se registra con preocupación el recrudecimiento del conflicto armado en tres subregiones de Antioquia: Bajo Cauca, Norte y Nordeste, y las disputas bélicas por el control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades económicas ilegales.

En la actualidad, opera en Valdivia la guerrilla del ELN, con el frente Héroes de Tarazá, en el corregimiento Puerto Raudal y en las zonas aledañas. Se suman a ella células de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC– y el grupo criminal conocido como Bloque Virgilio Peralta o Caparrapos, que se mueven, sobre todo, en la vía principal; y las disidencias del frente 36 de las FARC que, además, están en Ituango y Briceño. También se habla en Valdivia de la presencia de grupos conocidos como Águilas Negras y la banda urbana Los Pachelly, proveniente del municipio de Bello, en el Valle de Aburrá, y que al parecer tiene pequeñas células dedicadas a actividades ligadas al tráfico de drogas ilegales.

Con base en testimonios de campo, se sabe que en Yarumal se presentaron numerosos homicidios en 2018, sobre todo por microtráfico y disputas por territorio entre los grupos ilegales que operan en la zona urbana: la banda local Los Varela, el Clan del Golfo y los Caparrapos. Efectivamente, la zona urbana se encuentra en disputa; los grupos se confrontan entre ellos y esto es más latente desde ese año. La zona rural no se ve tan afectada a pesar de que hay corregimientos con muchos problemas, pero la zona urbana es la más compleja por su condición de *puerto seco* lo que hace posible distribuir la droga “para todos lados” (EN11. Yarumal, 9/10/2019). En enero de 2018 hubo una masacre en la vereda La Estrella en la que murieron siete personas; después ocurrió el caso del secuestro y asesinato de tres geólogos adscritos a la empresa minera de capital

.....  
2. Entre enero y agosto de 2018 se presentaron en el departamento alrededor de 12 000 víctimas de desplazamiento forzado, lo que representa una tercera parte de la población afectada a nivel nacional en el mismo periodo.

canadiense Continental Gold, en el corregimiento de Ochalí. Yarumal tiene veredas y corregimientos estratégicos para paso de tropas y estupefacientes que hacen parte de la ruta que comunica con el Bajo Cauca (EN10. Yarumal, 9/10/2019).

Actualmente se mantienen activos en el territorio los corredores estratégicos y zonas en disputa militar, como el Nudo de Paramillo, que intercomunica al departamento de Córdoba y a la subregión de Urabá; o como la troncal a la Costa Atlántica, tradicionalmente corredor estratégico y eje estructurante del territorio; también la conexión con el Nordeste por el cañón del Porce y hacia el río Magdalena (Cardona Trujillo, 2019).

La subregión presenta carencias en las condiciones de vida de la población, tiene sectores geográficos aislados, la presencia del Estado es insuficiente, hay déficit cualitativo y cuantitativo de servicios públicos y sociales, problemas de acceso a la tierra, inequidad en la distribución de la riqueza y desigualdad social y económica, sobre todo en las zonas de la vertiente del río Cauca y Río Porce (INER, Universidad de Antioquia, 2018).

### 3.1. Las víctimas del conflicto armado

De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación –IPC–, en el año 2017 vivían en el Norte alrededor de 263 742 habitantes, cifra equivalente al 3,9% de la población de Antioquia (6 613 063 habitantes) según proyección del DANE. De ese total, hasta 2016, 123 317 habitantes de la subregión se hallaban inscritos como víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas –RUV–, de la Unidad Nacional de Víctimas; algo así como el 49,4% de la población (IPC, 2017, citado por INER, Universidad de Antioquia, 2018). Estas cifras muestran la intensidad del conflicto que ha padecido el Norte.

Desde el año 2018 la cifra de recepción de personas desplazadas viene en aumento en Yarumal; por esta razón el municipio se

encuentra en alerta amarilla, pues los presupuestos se están quedando cortos para sobrellevar esta situación. Las familias desplazadas provienen principalmente de Tarazá, Cáceres, Valdivia y Zaragoza, donde sufren los efectos del agudo conflicto que afecta al Bajo Cauca. Ese año hubo un desplazamiento masivo del corregimiento El Doce. La última caracterización dio como resultado un total de 13 934 víctimas, casi todas reubicadas en Yarumal, aun cuando muchas de esas familias trabajan en otro lugar. En lo que va de 2019, en la oficina municipal de la Unidad de Víctimas se han tomado alrededor de 195 declaraciones que equivalen a 195 familias nuevas, cada una de ellas numerosa.

La población total de Gómez Plata es de 13 000 personas; hoy hay más de 900 víctimas registradas. Este municipio también es receptor de desplazados de Anorí, Saravena-Arauca, Medellín, San José del Guaviare, entre otros lugares del país. Muchas de las personas que llegan son víctimas por homicidio de familiares.

En el municipio de Valdivia la violencia se mantiene, pese al optimismo que generó por momentos el Acuerdo de Paz. En 2015 hubo 314 víctimas; en 2016 fueron 180; en 2017 se duplicó a 392; y en 2018 tuvo una leve disminución, llegando a 297, según datos de la Unidad Nacional de Víctimas.

Los registros oficiales de víctimas, sin embargo, son todavía muy bajos respecto a las dimensiones reales del problema. Organizaciones sociales de la zona estiman que en el área de influencia del megaproyecto hidroeléctrico Ituango hay más de 3000 personas desaparecidas, en su mayoría víctimas de masacres y combates en Antioquia y Córdoba. De acuerdo con afirmaciones del Movimiento Ríos Vivos Antioquia,

El Cañón del río Cauca ha estado agobiado por intereses en disputa los cuales han generado situaciones de intensa violencia desde hace más seis décadas; en ese contexto agravado por la construcción de Hidroituango se está agudizando la diversidad de hechos

victimizantes que han vulnerado los derechos humanos, civiles, políticos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de sus habitantes; ejemplo de ellos son los grandes desplazamientos forzados de las comunidades campesinas, pescadoras y barequeras, el empobrecimiento y el olvido estatal, las 62 masacres que han ocurrido en área de influencia del proyecto, entre ellas, las masacres de El Aro y La Granja en Ituango, por las cuales el estado colombiano fue condenado internacionalmente. (Movimiento Ríos Vivos, s. f.)

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice– solicitó en septiembre de 2018, ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–, medidas cautelares en la zona de influencia del proyecto para proteger las zonas donde presumiblemente se encuentran los cuerpos de miles de desaparecidos. Según el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial –EQUITAS–, en 12 municipios afectados directamente por Hidroituango existen 1883 registros de personas desaparecidas, de las cuales 949 son desapariciones forzadas, 609 secuestros, 248 reclutamientos, 67 NN. Según Ríos Vivos el subregistro puede estar entre 30 y 40% (El Espectador, 2019).

En Yarumal hay tres sujetos de reparación colectiva por masacres allí ocurridas: los corregimientos de Ochalí, El Llano y La Loma; como implementación de dicha reparación en dos de ellos se inició el proceso de sustitución de cultivos; en el Cañón del Rosario, por ejemplo, algunos campesinos empezaron a cultivar cacao; en Ochalí, El Llano y La Loma retomaron la ganadería, el café y cultivan aguacate. Allí no se hizo aspersión aérea y han disminuido las minas antipersona. Para algunas personas entrevistadas “sí se ven los efectos del proceso de paz” (EN07. Yarumal, 9/10/2019). Pero para otras, el proceso no fue exitoso, no saben si porque la gente cultivó en otros terrenos y no lo manifestó o porque los funcionarios públicos solo querían cumplir metas y llenar indicadores; se inició el proceso, se hizo desminado, acompañamiento

por el Ejército, pero eso no trascendió; parece que “desde arriba la orden fue no continuar” y en este momento en las zonas donde han existido los cultivos ilícitos ellos siguen sin ser erradicados (EN10. Yarumal, 9/10/2019).

### 3.2. Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos

La subregión Norte es, junto con Urabá y Bajo Cauca, una de las subregiones donde más asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se han producido. Para la Defensoría del Pueblo, en sus informes de riegos y alertas tempranas, las comunidades, defensores/as, líderes y lideresas sociales se encuentran en grave riesgo por la fuerte presencia paramilitar, en especial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC–.

Entre noviembre de 2016, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz con las FARC, hasta julio de 2018 en esta subregión se han presentado 47 agresiones contra la labor de líderes/as y defensores/as de derechos humanos. Los principales responsables de estas agresiones son las disidencias del frente 36 de las FARC (18 agresiones, 11 sin dato); los paramilitares (10 agresiones) y la Policía Nacional (6 agresiones). Del total, diez han sido asesinatos, una desaparición forzada y no se reportaron intentos de asesinatos. Líderes y lideresas asesinados y asesinadas pertenecían a organizaciones campesinas, comunitarias, de procesos de sustitución de cultivos, juntas de acción comunal y de procesos de lucha por el medioambiente y contra el megaproyecto Hidroituango, como es el caso del Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Sobre los responsables de estos asesinatos, se debe decir que en la mayoría de los casos (7 asesinatos) no se identifican las estructuras que los han cometido. En lo que se ha podido conocer sobre presuntos responsables, se tiene que un asesinato fue perpetrado por estructuras paramilitares, y otro en Briceño por

parte del Ejército Nacional. La zona del Norte donde han ocurrido estos asesinatos son los municipios de Yarumal, Briceño, Ituango y Valdivia (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018).

Las estructuras que buscan consolidarse en los municipios son especialmente AGC, Caparrapos, Los Pachelly y la Alianza Criminal del Norte. Es de anotar que en los municipios de Ituango y Briceño se vienen presentando actuaciones de grupos de la disidencia de las FARC, quienes han amenazado a líderes y defensores de derechos humanos (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018).

Entre 2016 (noviembre) y 2018 (julio) han sido asesinados en Antioquia 14 reincorporados de las FARC. El 50% de los casos se ha presentado en el municipio de Ituango, en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR– Santa Lucía. Presumiblemente los responsables de estos asesinatos en Ituango son los paramilitares. A la fecha se desconocen los resultados o avances en investigaciones que lleven a esclarecer estos crímenes (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018). En el ETCR de Santa Lucía la situación de riesgo para los excombatientes se ha vuelto insostenible, hasta el punto de que han sido asesinados varios de ellos en el mismo espacio o su alrededor, lo que ha llevado en los últimos meses de 2019 a decidir su traslado.

### 3.3. La violencia también afecta a los indígenas

El resguardo indígena Jaidukamá del pueblo Embera Eyábida está ubicado en el corazón del Nudo del Paramillo y lo habitan 400 indígenas. En la resolución de conformación del resguardo se entregaron 1371 hectáreas, “pero se hizo una modificación que consta de 2100 hectáreas, donde también está la comunidad San Román, creada por indígenas del resguardo buscando mejores condiciones de vida” (Ramírez & Agencia Prensa Rural, 2019).

Las autoridades del resguardo indígena Jaidukamá han denunciado la presencia de los grupos armados ilegales en su territorio. El Ejército también ha entrado, intimidando a la población.

La comunidad padece el abandono del Estado, sus territorios han sido violentados por la guerra y los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz no llegan para resolver sus necesidades más urgentes, pese a estar priorizados.

La Organización Indígena de Antioquia –OIA– emitió un comunicado mediante el cual lamentó “profundamente que tras la firma del Acuerdo Final de Paz, la situación en esta zona del departamento haya empeorado en materia de derechos humanos para las comunidades indígenas, negras y campesinas y que hoy nuevamente, las familias tengan que salir por la violencia” (Agencia Prensa Rural & Ramírez, 2019b).

### 3.4. ETCR Santa Lucía en Ituango

Como un modo de garantizar el cese al fuego y las hostilidades, así como la dejación de las armas e iniciar desde ahí el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC, los Acuerdos de Paz consideraron la creación de Zonas Veredales Transitorias de Normalización –ZVTN–, lo cual sucedió en enero de 2017. A partir de agosto de ese mismo año se inició una nueva etapa de implementación del Acuerdo de Paz, en la cual las ZVTN y los Puntos Transitorios de Normalización –PTN– se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR–, tendientes a la reincorporación de los excombatientes, la preparación de proyectos productivos y la atención de necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017).

En el país son en total 26 ETCR, de los cuales cinco están localizados en Antioquia, uno de ellos en el Norte, en la vereda Santa

Lucía de Ituango. Según el mismo informe de la Defensoría del Pueblo (2017), en relación con los riesgos de seguridad de sus integrantes, el ETCR de Santa Lucía estaba clasificado como de mediana complejidad por parte del Ministerio de Defensa Nacional, al igual que el ETCR de La Plancha en Anorí; mientras Carrizal en Remedios y Vigía del Fuerte (vereda Vidrí) estaban clasificados como de alta complejidad. En ese año, en el ETCR de Santa Lucía existía una sensación permanente de inseguridad acompañada de amenazas de muerte y asesinatos de miembros de las FARC, presencia constante de las AGC, grupos armados ilegales como Clan del Golfo y la banda de Los Pachelly. Había conflictividad a causa de los cultivos ilícitos, principalmente asociados con las AGC cuyo objetivo permanente es el control de los corredores de coca hacia el Pacífico y el Caribe por el Nudo de Paramillo. El nivel de riesgo de este territorio según la Defensoría del Pueblo era de alta complejidad, lo que no coincidía con el atribuido por el Ministerio de Defensa, de mediana complejidad (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017).

El asesinato de seis miembros del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –FARC– en Ituango disparó las alarmas, y la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha hecho énfasis en que el Estado no ha brindado garantías a estas personas en proceso de reincorporación, lo que podría ocasionar un mayor número de deserciones del ETCR que se irían a nutrir las filas de grupos armados ilegales los cuales están ofreciendo dinero para que se retiren y vuelvan a empuñar las armas (Ramírez & Agencia Prensa Rural, 2019).

Pese a este escenario, en el ETCR de la vereda Santa Lucía, en Ituango, tienen lugar otras iniciativas, como la producción del Café Paramillo. Se trata de un proyecto de emprendimiento que involucra a excombatientes de las FARC, y que ha logrado articular a pequeños productores de la región, además de víctimas y campesinos (Yarce Ospina & Jaimes, 2019).

### 3.5. Municipios PDET en Norte

A pesar del cuadro anterior de violencia incesante, varios de los programas acordados entre Gobierno colombiano y FARC han intentado abrirse paso con grandes dificultades, entre ellos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET–. Este programa fue concebido como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral –RRI–, acciones originalmente encaminadas a resolver problemáticas históricas en los territorios donde se vivió intensamente la violencia de fines del siglo XX.

De los 17 municipios del Norte, tres de ellos –Ituango, Briceño y Valdivia– fueron incluidos como prioritarios para la elaboración de PDET y hacen parte de los 13 priorizados en total en Antioquia. Parte de los recursos necesarios para tal fin, en el caso del Norte, debían provenir de las regalías generadas por el proyecto hidroeléctrico Ituango y su ejecución (INER, Universidad de Antioquia, 2018). Sin embargo, a causa de las emergencias y sobrecostos en los que EPM ha incurrido desde 2018 por las contingencias del proyecto, las obras de las Pequeñas Iniciativas Comunitarias –PIC– no se pudieron realizar en los municipios priorizados, por ejemplo en Valdivia, y, por esa razón, la implementación inicial del Acuerdo se retrasó. Sin embargo, las obras PIC planeadas se llevarán a cabo como parte de la ejecución del PDET, las cuales se han concertado con las comunidades a través del Plan de Acción de Transformación Regional –PATR– y se deberán realizar durante los próximos 10 años (Agencia Prensa Rural & Ramírez, 2019a). El presupuesto es de 5,15 billones de pesos que serán ejecutados a través de la Agencia de Renovación del Territorio –ART–.

Otra parte de los recursos para financiar las 86 iniciativas que resultaron seleccionadas luego de un proceso participativo local, municipal y departamental provienen, principalmente, de la cooperación internacional, pero también del Gobierno nacional; además,

las entidades territoriales contarán con dineros del presupuesto general de la Nación, del Sistema General de Participación, del Sistema General de Regalías y de fuentes de financiación privadas. De este modo, empresas como EPM, Corona, Argos, Mineros S.A., entre otras, destinarán el 50% de los impuestos a estos planes a través del mecanismo Obras por Impuestos para los municipios Zomac, es decir, para Zonas más Afectadas por el Conflicto.

Desde 2017 se declararon en Antioquia 55 municipios Zomac, los que equivalen al 44% del territorio del departamento. De ellos, nueve se encuentran en la subregión Norte (Angostura, Briceño, Campamento, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia y Yarumal) (Presidencia de la República, 2017b).

La reforma tributaria aprobada hace tres años le abrió paso al mecanismo Obras por Impuestos, que después del primer año de implementación –y el segundo de estar en marcha– les ha permitido a las empresas adelantar inversiones directas en proyectos desarrollados en los municipios más afectados por el conflicto, a través del impuesto sobre la renta y complementario. Pero en diciembre de 2019, y luego de dos años, la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso cambió las reglas para los proyectos Zomac,

con los ajustes a Obras por Impuestos, las empresas no tendrán los recursos suficientes para invertir en proyectos de gran envergadura e impacto; por el contrario, implementarán, en su mayoría, proyectos pequeños que no contribuyen a generar una transformación integral en los territorios, sino cambios puntuales. Lo anterior pone en riesgo el espíritu del mecanismo, que busca transformar las ZOMAC. (Gutiérrez, 2019)

### 3.6. Pobreza, cultivos de coca, violencia y PNIS

De acuerdo con el estudio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI– y la Oficina de las Naciones Unidas contra

la Droga y el Delito –UNODC– (2018), la relación entre afectación por cultivos ilícitos y niveles de pobreza en los territorios es directa. Para el territorio nacional, respecto de esta relación, el estudio arroja que los municipios afectados por cultivos ilícitos presentan un indicador de pobreza multidimensional rural –IPMR–<sup>3</sup> que es un 15% superior al de los municipios no afectados por esos cultivos.

Sobre el comportamiento del IPMR en los municipios afectados por la presencia de cultivos de coca en Antioquia, según los diferentes mapas, puede deducirse lo siguiente para la subregión Norte: en Ituango el indicador es bajo, mientras en Briceño, Campamento y Valdivia es alto, y en Yarumal, medio (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI– & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–, 2018).

El estudio citado concluye para Colombia que existen altos niveles de pobreza multidimensional en los territorios afectados por coca en comparación con los que no se encuentran afectados por ese cultivo, lo cual muestra una relación de doble vía, es decir, que es posible que un territorio en condiciones de pobreza tenga mayor grado de favorabilidad para el establecimiento de estos cultivos o que su establecimiento haya contribuido a agravar las condiciones de pobreza del territorio (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI– & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–, 2018).

Otro indicador que podría explicar la ubicación de cultivos ilícitos en estos municipios ha sido denominado *rezago de rendimiento agropecuario* y se refiere a la viabilidad de la producción agropecuaria<sup>4</sup>.

3. Según el Censo Nacional Agropecuario (2015), este indicador contempla cuatro dimensiones: condiciones de los hogares, condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud y de salud.

4. El indicador de *rezago de rendimiento agropecuario* compara el rendimiento obtenido por los tres principales renglones de producción (principal cultivo permanente, principal cultivo transitorio y producción de ganado bovino) con los

Ituango y Yarumal presentan un rezago medio, pero Campamento, Briceño y Valdivia presentan un rezago alto.

En Antioquia se continúan consolidando los núcleos de alta densidad de siembra de coca, además con una sucesión de continuidad espacial entre Bajo Cauca, Norte y Nordeste. En la subregión Norte los municipios afectados por cultivos de coca son Briceño, Ituango, Toledo, Yarumal, Campamento y Valdivia, según se observa en los mapas de áreas de cultivo que trae el estudio de SIMCI & UNODC (2018). Frente al año 2016, los núcleos solo presentaban diferencias en la densidad de siembra. En 2017 el 50% del área sembrada en Antioquia se localizaba en Valdivia y Tarazá, a diferencia de Briceño que para ese año presentaba reducción del área a pesar de la tendencia adyacente. Esta dinámica puede estar asociada con la intervención de programas de sustitución voluntaria y al acompañamiento institucional por medio de diversas estrategias de fortalecimiento productivo (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI– & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–, 2018).

Las áreas de manejo especial, como parques nacionales, resguardos indígenas y tierras de comunidades negras, también se han visto afectadas por la presencia de actividades ligadas al narcotráfico, en especial la siembra de cultivos ilícitos. El 67% de área sembrada de coca en los parques nacionales se ubica en tan solo tres áreas protegidas: Sierra de la Macarena, Nukak y el Parque Nacional Natural Paramillo, cuya zona de amortiguamiento se encuentra en el municipio de Ituango, como se mencionó anteriormente.

.....  
rendimientos que podría obtener haciendo uso de la tecnología apropiada (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI– & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–, 2018). Los municipios que presentan niveles de rezago más bajos tienen una capacidad de producción superior. En los que se clasifican como altos se supone que la viabilidad de la producción agropecuaria es extremadamente baja.

Buena parte del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños conforman un bloque de conflictividad creciente desde tiempo atrás, cruzado por cultivos de coca, laboratorios para su procesamiento y lucha por las rutas de circulación de pasta de coca hacia la Costa Caribe, a través de las subregiones de Occidente y Urabá. En estas condiciones resulta innegable que las enormes dimensiones económicas, políticas y sociales del narcotráfico sean uno de los factores que ha favorecido la persistencia del conflicto armado en Colombia (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018).

Más recientemente la producción de pasta de coca para la exportación se ha cruzado con el microtráfico y el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en las cabeceras municipales en esas subregiones. Asociado a esto, se presenta otro fenómeno que se disparó en 2016 tras la desmovilización de las FARC, consistente en la expansión de cerca de nueve bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, las cuales participan en negocios ilegales diversos, todos altamente rentables: tráfico de armas y drogas, sicariato, extorsión, minería ilegal, pagadario y lavado de activos. En algunos casos actúan por medio del patrocinio o subcontratación de combos locales.

El auge del microtráfico en los cascos urbanos va de la mano del crecimiento del consumo. Según el Observatorio de Drogas de Colombia (2017), el nivel de consumo de alucinógenos en Antioquia está por encima del promedio nacional. Por otro lado, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas en Población Escolar de 2016 muestra que uno de cada cinco estudiantes en Antioquia consume droga (El Colombiano, 2019). Esta situación perjudica a los pobladores de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Donmatías, San Pedro de los Milagros, Gómez Plata, Cisneros, Yolombó, Yalí, Vegachí, Amalfi, Segovia y Anorí.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia, el área cultivada en coca en el municipio de Valdivia se ha

extendido en los últimos años de manera acelerada y representa una fuente importante para la economía local. En el año 2013 había 32 hectáreas sembradas; en 2014 ya había 298; en 2015 descendió a 190, pero en 2016 el área sembrada se incrementó a 1621 y para 2017 ya se encontraba en 2900 hectáreas (Verdad Abierta, 2019).

Por su ubicación en inmediaciones del Nudo de Paramillo, el municipio de Ituango ha sido desde hace varias décadas un corredor estratégico para la ilegalidad. En casi todas las veredas hay cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Ese municipio es el mayor productor de coca del departamento (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2107). Hasta 2014 la producción y venta de pasta base de coca era regulada por las FARC, pero después de su desintegración como grupo armado ese control fue tomado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC–; para 2019, distintos grupos armados se disputan el control del territorio (Ramírez & Agencia Prensa Rural, 2019).

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS– fue una estrategia contemplada en el Acuerdo Final pactado con la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto. Los municipios que se acogieron en Norte, Bajo Cauca y Nordeste fueron: Briceño, Campamento, Ituango, Toledo, Valdivia; Cáceres, Tarazá; y Anorí.

En marzo de 2017 se firmó el acuerdo voluntario para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Briceño, y a partir de ese momento los campesinos de ese municipio mostraron importantes avances, arrancando la totalidad de dichos cultivos en once veredas, mismas que fueron priorizadas en el plan piloto de sustitución presentado en julio de 2016 y pretendían extenderlo a las veredas restantes.

Estos campesinos están resintiendo, sin embargo, la falta de garantías de seguridad efectivas para reemplazar la hoja de coca por cultivos legales, porque los asesinatos de líderes cocaleros no han frenado en el bloque Norte-Nordeste-Bajo Cauca de Antioquia

desde fines de 2017; además, carecen de asistencia técnica para adelantar los proyectos productivos que le den sostenibilidad a la sustitución; los recolectores o “raspachines” aún no reciben los pagos acordados para ellos; el Estado ha mostrado total incapacidad para copar los territorios dejados por las FARC y los actores ilegales que han venido a ocupar los territorios cocaleros amenazan a las familias que participan en el PNIS (Verdad Abierta, 2017a).

En 26 de las 36 veredas que componen el territorio de Valdivia se siembra hoja de coca para uso ilícito. Esos cultivos generan graves conflictos en el municipio por cuanto grupos armados ilegales no han dejado que los cultivadores se acojan al PNIS, pactado en el Acuerdo de Paz. Esa presión ha provocado un miedo generalizado, pues las personas no quieren asistir a reuniones y se resisten a liderar procesos; por el contrario, se aíslan y prefieren abandonar la región (Verdad Abierta, 2019).

En 2013 Ituango tenía 27 hectáreas de hoja de coca, mismas que para 2017 se habían incrementado a 865 hectáreas, según el Observatorio de Drogas de Colombia, ocupando el cuarto lugar en la lista de los lugares donde más se registraban sembradíos en Antioquia, después de Tarazá, Cáceres y Valdivia (esta información difiere de la que ofrecía para ese mismo año la Defensoría del Pueblo).

En abril de 2018 los cultivadores de hoja de coca de 55 veredas de Ituango firmaron el acuerdo colectivo de erradicación, acogéndose al PNIS, pero luego el Ejército Nacional llegó a erradicar forzosamente sin respetar los acuerdos que ya muchos campesinos habían suscrito. Aún siguen erradicando con la oposición expresa de la Asociación de Campesinos de Ituango –Ascit–.

El incumplimiento del Gobierno nacional motivó a los campesinos a movilizarse masivamente en tres oportunidades para exigir la implementación del PNIS. La primera movilización ocurrió en abril de 2018, cuando cerca de 200 campesinos llegaron a la cabecera municipal de Ituango, después de llevar ocho días de enfrentamientos

con la fuerza pública para frenar la erradicación forzada en el corregimiento El Aro. La segunda movilización se hizo en el Nudo de Paramillo en mayo de 2018. Y la tercera fue en febrero de 2019, en el corregimiento de Santa Rita, donde más de 1000 campesinos de 21 veredas salieron a protestar por las continuas erradicaciones, además de la presión de los grupos armados ilegales que impiden la sustitución voluntaria (Ramírez & Agencia Prensa Rural, 2019).

El viraje de la política de sustitución, con la inclusión nuevamente de las aspersiones con glifosato y la erradicación forzada, deja de lado la posibilidad de la erradicación manual y la implementación de cultivos sustitutos. Este retroceso puede generar en el escenario futuro un incremento del conflicto social y ambiental, un detrimento en la base natural de la región y comprometer la seguridad alimentaria de las comunidades (INER, Universidad de Antioquia, 2018).

En este proceso se ha generado un nuevo ciclo de violencia, en el cual los distintos grupos armados han identificado a los líderes sociales y defensores de derechos humanos como objetivo de sus ataques. Se evidencia una coincidencia espacial entre las regiones del país con mayor presencia de cultivos de coca y las regiones en las que han ocurrido más asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018). Muchas de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el periodo reciente, han estado relacionadas con la oposición a la construcción de paz y la implementación del Acuerdo, llevada a cabo por sectores de la sociedad que se han lucrado de la guerra, especialmente en aquellos territorios que han sido afectados por el clientelismo, la corrupción, la ilegalidad y el narcotráfico (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018).

El estudio del IEPRI ya citado va aún más allá cuando afirma:

Sin embargo, la sucesión de errores en su implementación (de los Acuerdos de paz), los intereses económicos de poderosos narcotraficantes nacionales e internacionales, sumados a la férrea oposición de ciertos sectores al interior del Estado, entre otros factores, bloquearon la política de sustitución de cultivos de uso ilícito y han ocasionado su fracaso en los territorios más álgidos del país. (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018)

Más adelante, el mismo estudio afirma: “El aumento de hectáreas sembradas y el del número de líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito asesinados da cuenta del fracaso de las políticas estatales con respecto al tema del narcotráfico” (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– *et al.*, 2018). Y puede agregarse, del retorno de la guerra.



## 4. Emergencia de movimientos sociales y organizaciones populares relacionadas con la defensa del territorio y la resistencia a las hidroeléctricas

De acuerdo con el anterior estudio sobre la subregión Norte, realizado desde la Universidad de Antioquia, los habitantes de la zona no han contado con organizaciones sociales fuertes y en su historia tampoco se registran grandes movilizaciones. Un factor es la presencia de EPM en buena parte del territorio, la cual parece haber copado la totalidad de los espacios generando dependencia y paternalismo, y haber convertido aparentemente en innecesarios los liderazgos sociales en los municipios de su área de influencia (Dirección de Regionalización *et al.*, 2007)<sup>1</sup>. Sin embargo, en 2006, año en el que EPM planteó la construcción de la hidroeléctrica Porce IV, aquella anomia organizativa comenzó a transformarse, como se verá a continuación.

En los años recientes, tres grandes asuntos parecen haber unificado a la población de esta subregión para impulsarla a manifestarse y adelantar importantes procesos sociales de resistencia: los

---

1. Otro factor explicativo entre los que ofrece el mencionado estudio (2007) es la fuerte presencia de algunos religiosos de la iglesia católica que lideraron durante décadas la conformación de asociaciones religiosas mucho más fuertes que las organizaciones civiles.

efectos socioambientales de las megaobras hidroenergéticas, los incumplimientos por parte del Estado en materia de seguridad y acuerdos de paz y la defensa del territorio y el derecho a la tierra.

Si bien en este apartado se tratarán cada una de esas motivaciones para la movilización y las organizaciones sociales que las impulsan, los reclamos se cruzan sin que puedan deslindarse completamente unos de otros, pues los mismos sectores sociales y organizaciones se están movilizandando por los diferentes objetivos.

## 4.1. Reclamos colectivos por los efectos económicos, sociales y ambientales de las hidroeléctricas

Paradójicamente han sido precisamente las hidroeléctricas como grandes obras de infraestructura las que han desatado procesos sociales y comunitarios de resistencia.

### 4.1.1. Hidroeléctricas del Porce. Consejo Comunitario del Cañón del río Porce-AZA

Hoy en día en el cañón del río Cauca se escuchan voces de indignación y rabia que en el Porce nunca antes pudieron expresarse, a pesar de que por décadas las comunidades de las cuencas de los ríos Guadalupe y Porce, muy especialmente los mineros artesanales y barequeros, sintieron en su carne los impactos de los proyectos energéticos de EPM.

Entre Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe se instalaron los primeros proyectos hidroeléctricos en Antioquia, en la década de 1930, utilizando las aguas del río Guadalupe. Desde Guadalupe I, que entró en función en 1932, pasando por Guadalupe II, III y IV, en las décadas siguientes esas aguas fueron usadas para generar energía. A principios de la década de 2000, EPM trasladó sus operaciones a Porce II y en 2010 puso en

operación la hidroeléctrica Porce III. Su funcionamiento ocasionó una variación en los niveles del agua del río que lo volvieron impredecible y hacen imposible trabajar la minería artesanal, además, hacen que el río “se lo lleve todo a su paso”.

Situaciones complejas de daño poco conocidas que las comunidades del cañón del Porce vivieron a raíz de la manipulación del río en beneficio de EPM –canales de comunicación inexistentes con la empresa, información incompleta e inoportuna sobre los proyectos, censos de población recortados, desalojos sin indemnización o con indemnizaciones injustas, desarticulación del tejido social, cambios en la vocación productiva de las poblaciones, cambios culturales; además, efectos hidráulicos desconocidos “buchas”<sup>2</sup>), sin posibilidades de manejo ambiental ni social– generaron tensiones sociales entre ambos actores (comunidades y EPM), además de las administraciones municipales que entraron como terceros, la mayoría de las veces en defensa de los intereses de la empresa.

Casi dos décadas después, las tensiones sociales ocasionadas por los daños producidos por EPM a las comunidades del Porce desataron un proceso de diálogo, *reconciliación* y reconstrucción de confianza entre las partes mediado por la Fundación Ideas para la Paz –FIP– y USAID<sup>3</sup>. “Por eso se hizo necesario el diálogo entre EPM y las comunidades. Se sentaron cara a cara para resolver cómo iban a reparar los daños”. De ahí surgieron compromisos para trabajar por el desarrollo del cañón del Porce (Valdés Correa, 2019).

Sin embargo, para que en 2011 EPM se viera obligada a suspender indefinidamente la construcción del proyecto hidroeléctrico Porce IV tuvo mucho que ver la lucha del Consejo Mayor Comunitario del Cañón del Porce-AZA. Esta organización se conformó en

.....  
2. Variaciones intempestivas de los niveles del río aguas abajo de la presa que producen subidas del agua generadas por las descargas de grandes volúmenes de agua de la represa en su proceso de producción de energía.

3. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

el año 2009 a raíz de la necesidad de superar las difíciles situaciones que vivían las familias por los proyectos Porce II y Porce III y las intervenciones de EPM en el territorio (Pino Franco & Sánchez Calle, 2016); se convirtió en un canal de negociación entre las comunidades y la empresa. La organización se conformó con integrantes de las juntas de acción comunal, asociaciones de mineros, dueños de predios, transportadores (chiveros y arrieros) de tres de los municipios afectados por Porce IV. En su momento, voceros de esa organización planteaban que el proyecto pudiera frenarse por las lecciones aprendidas de Porce II y III (Cárdenas Delgado, 2011).

Lo primero fue organizar a los mineros, pequeños, medianos y grandes, quienes entendieron la importancia de unirse y ejercer control del territorio que habitaban; después crearon sus propias bases de datos e incluyeron en ellas a todos los que trabajaban en la región y se verían afectados por las obras, al igual que a los familiares que dependían económicamente de ellos; acordaron con la empresa un manual de valores de predios y otro manual de valores mineros para orientar las negociaciones; en ellos se apoyaron para solicitarle a la empresa las indemnizaciones y compensaciones que consideraban justas por los daños que ocasionaría a las personas y al territorio. No se sabe si tal vez en esos momentos fue cuando la empresa comprendió los costos reales de la construcción de una hidroeléctrica, costos que hasta ese momento ella le había derivado o externalizado a la naturaleza y al resto de la sociedad, y estas habían soportado como cargas del desarrollo.

Sin embargo, lo más notorio de una organización social como el Consejo Comunitario del Porce-AZA es una visión que no se agota en las reclamaciones a EPM y se expande para fomentar en su gente el derecho a vivir bien, que se concreta para campesinos y mineros del Norte de Antioquia en la creación de zonas de reserva campesina sustentadas en la noción del buen vivir, la cual involucra reciprocidad, cooperación, complementariedad e implica un

desplazamiento desde la acumulación como categoría central a la vida (León, 2009, citado por Svampa, 2012)<sup>4</sup>; son espacios con educación, salud y todo lo que necesita el ser humano.

El suceso más reciente en la relación de EPM con las comunidades del Porce es la creación y puesta en funcionamiento de la Alianza EPM-PNUD como una forma novedosa de abordar el desarrollo territorial. La Alianza para el desarrollo sostenible e incluyente, la reconciliación y el buen gobierno en municipios de Antioquia se lleva a cabo en 12 municipios del Norte y el Nordeste, dependientes de la cuenca del río Porce, en una de las zonas de influencia de las centrales de generación eléctrica del departamento. Su cobertura son los municipios de Amalfi, Angostura, Anorí, Belmira, Carolina del Príncipe, Donmatías, Entreríos, Gómez Plata, Guadalupe, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Yolombó, donde existen hoy en día cerca de 650 organizaciones sociales, 543 de ellas juntas de acción comunal (Grupo EPM, 2017).

#### 4.1.2. Resistencia a Hidroituango. Movimiento Ríos Vivos Antioquia –MRVA– y cañoneros del Cauca

Buena parte de los actuales habitantes del cañón del río Cauca, afectados por la construcción de la hidroeléctrica Ituango, son descendientes de los 950 habitantes del resguardo indígena de San Pedro de Sabanalarga del Cañón del Cauca creado a comienzos del siglo XVII y disuelto en 1837. Esas tierras fueron repartidas entre sus habitantes, indígenas Nutabe, quienes recibieron los títulos de las tierras del Cañón correspondientes a los actuales municipios de Sabanalarga, Toledo, Buriticá e Ituango, situadas a ambos lados del río Cauca en las vertientes de las cordilleras Central y Occidental.

.....  
4. Noción del ecologismo indígena que implica reciprocidad, cooperación, complementariedad y un desplazamiento de la acumulación como categoría central a la vida (León, 2009, citado por Svampa, 2012).

Los cañoneros, como se autodenominan, han habitado las tierras a orillas del río Cauca desde tiempos ancestrales; allí nacieron sus antepasados, siguiendo una sucesión que hunde sus raíces en tiempos precolombinos, según afirma la arqueóloga Neyla Castillo Espitia, exprofesora del departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. Su sociedad y cultura se estructuran en torno al barequeo en el río Cauca de donde extraían oro con bateas y cajones, y con el oro extraído compraban todos los alimentos que no producían. Su alimentación estaba basada en el pescado y, ocasionalmente, carne de animales de monte que obtenían de la caza en los bosques ribereños, donde también recogían frutas, leña, plantas medicinales y alimenticias (Castillo Espitia, 2018). En ese contexto sociocultural emergió Hidroituango.

La hidroeléctrica se construyó, además, en una zona que históricamente ha sido escenario de una aguda violencia sociopolítica y del conflicto armado. Según un informe de la Corporación Jurídica Libertad –CJL–, organización defensora de los derechos humanos en Antioquia, entre 1990 y 2016 ocurrieron cerca de 50 masacres en el área de influencia directa del proyecto. Sin embargo, al cruzar diferentes fuentes, la cifra puede llegar a 62, con 372 víctimas; y entre 342 y 643 las víctimas de desaparición forzada. Los asesinatos selectivos reemplazaron las masacres, sobre todo de líderes de la zona, generando nuevos temores en la población. Por eso, en la misma actualización del EIA de Hidroituango (2011), se encuentra que existe una alta debilidad en las organizaciones sociales (Torres Sánchez, 2013).

El tercer actor de este drama social es el Movimiento Ríos Vivos Antioquia –MRVA–, el principal opositor al proyecto y el actor de mayor visibilidad en el conflicto. Está compuesto por 15 asociaciones campesinas de municipios afectados por el megaproyecto energético. Ha denunciado los impactos que se han ido evidenciando al mismo ritmo que se desarrolla el proyecto. En 2016 alertó sobre

la tala de más de 4000 hectáreas de bosque seco, la desaparición de cientos de especies, el impacto sobre la actividad cultural ancestral del barequeo y el desconocimiento de los derechos de personas y comunidades que han sido desalojadas de sus playas, ríos y veredas.

Esta organización ha sustentado la posición más radical al exigir la suspensión de las obras, mientras otras organizaciones buscan que se mejore la gestión por parte de la empresa ejecutora y/o que se mejoren las condiciones de seguridad por parte de la fuerza pública (Torres Sánchez, 2013). Desde 2018, después de la emergencia que generó el taponamiento de los túneles de desviación y la inundación de la casa de máquinas, Ríos Vivos ha exigido el desmantelamiento de Hidroituango por los riesgos que a futuro acarrea para las poblaciones aguas abajo de la presa, en el Bajo Cauca, la Mojana sucreña y el sur de Bolívar.

Las denuncias de Ríos Vivos en relación con Hidroituango se resumen como sigue: asesinatos de cuatro miembros del MRVA, falta de atención a las denuncias y peticiones de esa organización para la protección de personas, ausencia de resguardo de lugares de inhumación de cuerpos humanos, falta de respuesta a los habitantes afectados, desprotección del bosque y los animales, así como la desatención a las sucesivas emergencias provocadas por el taponamiento del túnel de desvío del río Cauca; también los derrumbes, inundación de casa de máquinas, desbordamiento y generación de avalancha aguas abajo del muro de presa, afectando directa y principalmente a comunidades del corregimiento Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, pero que también amenazan a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí en Antioquia; San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué en Bolívar; Guaranda, Sucre y otros.

Ríos Vivos también ha denunciado el manejo que EPM le ha dado a la indemnización a los propietarios de predios frente a la declaratoria de utilidad pública de los suelos necesarios para la realización del proyecto. Por ejemplo, en 2013, en la Vereda Orejón

de Briceño, pasados dos años no les habían comprado el terreno, no los dejaban cultivar y no les habían reconocido las pérdidas por no poder disponer de la tierra. Esta situación casi generalizada en el área de influencia se debe, según Ríos Vivos, a dos razones principales: 1) el censo no incluyó a todos los propietarios y 2) el valor del m<sup>2</sup> en el Manual de Valores Unitarios, no les permite a las personas comprar una tierra similar en pueblos cercanos” (Movimiento Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013, citado por Torres Sánchez, 2013).

#### 4.1.3. Movilización social contra Hidroituango

Las manifestaciones en contra del proyecto comenzaron en 2010, cuando se realizó una marcha de alrededor de 3000 personas en apoyo a la comunidad desalojada de forma forzosa en la localidad de Tenche, Ituango. En ese mismo año, el 16 de mayo, en la margen izquierda del río, cerca de Ituango, desalojaron a 150 barequeros prometiéndoles compensación y, aunque muchos sí fueron compensados, otros quedaron por fuera del censo (Movimiento Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013, citado por Torres Sánchez, 2013).

En marzo de 2011 se desarrolló en Ituango una marcha que congregó entre 4000 y 5000 personas de los municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Toledo, cuyo objetivo fue expresar las inconformidades, temores, miedos, dudas e inquietudes de diferentes sectores sociales ante los impactos sociales, ambientales y económicos generados por las obras del proyecto hidroeléctrico. Además, exigir la urgente necesidad de un debate público donde se aclararan los impactos negativos del megaproyecto (Notiagen, 2011, citado por Torres Sánchez, 2013).

Las manifestaciones en contra del proyecto continuaron, hasta que en agosto de 2012 se iniciaron diálogos entre la empresa ejecutora del proyecto, EPM, y las comunidades afectadas agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos, con la mediación de la Gobernación de

Antioquia. En esa reunión, realizada el 28 de septiembre de 2012, los líderes comunitarios solicitaron una sesión donde la empresa socializara el proyecto, de forma que pudieran entenderlo y resolver sus dudas. Si bien la presentación fue suficientemente clara en términos físicos, técnicos y legales, no lo fue en el tema social y ambiental, que era el principal interés de los asistentes.

A comienzos de marzo de 2013 muchas organizaciones sociales de los municipios cercanos a la zona de las obras realizaron varias jornadas de protestas pacíficas en el Valle de Toledo, con ocasión de las cuales la represión oficial buscó amedrentar a la población (Movimiento Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013, citado por Torres Sánchez, 2013). Ante el temor por las acciones violentas realizadas en contra de los manifestantes, cerca de 235 personas afectadas reunidas en el Movimiento Ríos Vivos decidieron desplazarse caminando hacia la ciudad de Medellín el 17 de marzo de 2013, para buscar diálogo directo con la Gobernación de Antioquia. Llegaron a Medellín el 20 de marzo y se refugiaron en las instalaciones del Coliseo de la Universidad de Antioquia (Debate ciudadano sobre Hidroituango, 2013, citado por Torres Sánchez, 2013, p. 68).

Durante su permanencia en Medellín realizaron jornadas de protestas, actividades académicas de análisis de la situación en el área de influencia y buscaron contacto con la Gobernación departamental. También solicitaron ayuda humanitaria (alimentación, albergue, protección y salud) a autoridades municipales y departamentales para las personas congregadas, la cual, sin embargo, no recibieron. Después de más de seis meses, las casi 400 personas refugiadas decidieron regresar el 25 de octubre luego de un acuerdo con la Gobernación de Antioquia, en el cual esta se comprometió a dar todas las garantías para regresar, principalmente en cuestiones de seguridad. Mientras estuvieron refugiados, dos líderes del movimiento fueron asesinados, otros recibieron atentados en sus viviendas, y otros fueron amenazados. Por temor a las amenazas

recibidas, 70 personas decidieron no regresar (REDLAR, 2013, citado por Torres Sánchez, 2013).

La movilización en Medellín originó la promulgación de un decreto por el cual se creaba la Mesa de diálogo, análisis y búsqueda de soluciones de conflictos originados por la construcción de megaproyectos minero-energéticos en Antioquia. Pero solo un año después de creada se logró que el gobierno departamental la instalara. Ríos Vivos presentó las afectaciones en el marco de la misma esperando respuestas concretas por parte de la Gobernación, lo cual nunca ocurrió; por el contrario, esta institución dilató el cumplimiento de los compromisos adquiridos, estigmatizó y señaló al Movimiento como ilegal (Movimiento Ríos Vivos Antioquia, 2018a).

De acuerdo con MRVA, todas estas problemáticas han sido expuestas durante estos años ante las autoridades ambientales y judiciales, y se han interpuesto todo tipo de acciones legales (demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, tutelas en amparo a los derechos a la justicia y a la participación, varias giras de incidencia nacional e internacional, manifestaciones, protestas, actos simbólicos, reuniones, mesas de trabajo con entidades públicas). Por todas esas expresiones de resistencia crítica y activa a Hidroituango desde 2012, se vienen generando amenazas a los líderes e integrantes del Movimiento Ríos Vivos, el cual ha responsabilizado a la empresa Hidroituango S.A. E.S.P., a EPM y los accionistas mayoritarios, a la Gobernación de Antioquia y al Instituto de Desarrollo de Antioquia –IDEA–, de la afectación de derechos que ocasiona este megaproyecto.

A fines de 2018 el Movimiento Ríos Vivos recibió una amenaza colectiva e individual hacia sus líderes fundadores. Los autores fueron las AGC. Esta amenaza se dio en el contexto de la estigmatización por parte de la administración municipal de Ituango, los señalamientos del gobernador de Antioquia y de la persecución que viven sus integrantes (Movimiento Ríos Vivos Antioquia, 2018c). Ese

mismo año, dos líderes fueron asesinados. En 2019 se forzó la salida del país de otros dos líderes del Movimiento para garantizar su vida, entre ellos la presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de las veredas de Chirí, Orejón y Buena Vista de Briceño –ASVAM ORCHIBÚ– (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo & Movimiento Ríos Vivos Antioquia, 2019).

De acuerdo con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, las amenazas a los integrantes del Movimiento Ríos Vivos han provenido, principalmente, de la fuerza pública. Frente a los asesinatos y a las amenazas de muerte que penden sobre estos líderes sociales, la posición ideológica de Ríos Vivos se refleja en su Plan de seguridad y protección para cerca de sus 800 integrantes (barequeros, arrieros, agricultores, paleros, areneros, organizaciones de mujeres y jóvenes). En dicho plan, el Movimiento le exige al Gobierno nacional que reconozca la legitimidad de defender los ríos en Colombia y de oponerse a los proyectos minero-energéticos en el territorio; de fortalecer la organización social y comunitaria “con nuestras propias medidas de protección, con espacios de análisis para hacer el contexto y también para saber cómo cambia”.

El comunicado del Movimiento Ríos Vivos, donde informa sobre su Plan de seguridad y protección, continúa así:

Para nosotros el tema de la protección es un punto importante, pero reconocer nuestra legitimidad es una obligación del Estado para así proteger nuestros derechos que es lo contrario a estigmatizar, reconocer que lo que hacemos no es ilegal, es posible, que debería ser así, que creemos que los ríos deben dejarlos quietos, que no los toquen, no los contaminen, no los desvíen y no los representen. (Movimiento Ríos Vivos Antioquia, 2018b)

Legitimar sus voces y fortalecer la organización social y comunitaria son las principales medidas que entre otras contiene este Plan de seguridad y protección.

## 4.2. Reclamos por los incumplimientos del Gobierno nacional a los Acuerdos de Paz

De otro lado, las situaciones creadas por el Gobierno nacional con el incumplimiento de los acuerdos firmados por los campesinos, para la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, han generado rechazo, reclamos y protestas. En medio de esto, las vidas de esos campesinos y dirigentes de las organizaciones sociales que se han acogido al PNIS se encuentran en riesgo, pues los grupos ilegales armados que se han asentado en el territorio después de la salida de las FARC y que controlan el comercio, circulación y distribución de coca y marihuana, les impiden la erradicación voluntaria. El gobierno les impone la erradicación forzada y muchas veces violenta, mientras aprueba la fumigación aérea o con drones, con el cancerígeno herbicida glifosato.

En medio de esa situación y unidos en los reclamos se encuentran la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM–, la Asociación Campesina del Norte de Antioquia y las asociaciones de Campesinos de Briceño –ASCA-BRI–, de Ituango –ASCIT– y de Toledo –ASCAT–.

Tal y como afirma la Defensoría del Pueblo, la adscripción a procesos organizativos le ha permitido a la población

resistir la violencia, adelantar procesos de visibilidad de las afectaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y liderar procesos de exigibilidad con resonancia nacional e internacional. Con las amenazas y los homicidios se pretende como fin último desincentivar la participación política y popular de los movimientos sociales de base, instalar el temor generalizado con el ánimo de afectar su labor de denuncia, minimizar sus acciones de visibilización y diezmar su proceso de reivindicación de derechos. (Defensoría del Pueblo de Colombia-SAT, 2017, citado

por Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU–, Nodo Antioquia *et al.*, 2017, p. 70)

#### 4.2.1. COCCAM por el respeto de los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y del PNIS

La COCCAM surgió en enero de 2017 con el propósito de constituirse como un actor determinante en la solución integral de la problemática de los cultivos de uso ilícito en el país, buscando la construcción de paz y la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. La COCCAM ha participado de manera activa en los escenarios de discusión y concertación locales, regionales y nacionales definidos en el decreto de creación y reglamentario del PNIS; además ha impulsado la conformación de comités cocaleros veredales, municipales, departamentales y una coordinación nacional conformada por más de cincuenta líderes de doce departamentos y cinco organizaciones nacionales. Está conformado por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que vieron en la firma del Acuerdo de Paz la posibilidad de superar las condiciones de marginalidad y violencia política producto de la aplicación de diferentes políticas económicas y agropecuarias, así como terminar después de más de medio siglo el conflicto armado en Colombia.

Desde antes de la expedición del decreto de creación del PNIS (Decreto 896, 2017) la COCCAM sostuvo una comunicación constante y fluida con las instituciones del Gobierno nacional a cargo de la implementación del programa. Se logró concertar medidas en materia de derechos humanos y la suspensión de acciones de erradicación donde se venían adelantando las jornadas de socialización, firmas de acuerdos colectivos de sustitución e inscripción de las familias cultivadoras al programa. Aunque el cumplimiento de los mismos siempre fue parcial, dichos acuerdos fueron reforzados y legitimados en la jornadas de concertación que se tuvieron en el

mes de octubre de 2017 en el marco del paro nacional agrario, adelantado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA–, en la que el gobierno se comprometía, entre otras cosas, a establecer medidas de protección y seguridad a los líderes desde un enfoque territorial, es decir, la vinculación y articulación de las autoridades locales y organismos de seguridad con los líderes de sustitución (Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA–, 2017).

A diciembre de 2018, 47 miembros de la COCCAM habían sido asesinados, todos los miembros de la instancia nacional estaban amenazados de manera individual y colectiva, y 5 de los 12 integrantes de la comisión política nacional se encontraban en condición de desplazamiento forzado. Sumado a esta tragedia, las acciones de erradicación violenta en los territorios no habían cesado, incluso en aquellos en los que ya se habían realizado asambleas de socialización, acuerdos colectivos de sustitución y se había avanzado en la sustitución de cultivos. Además, el gobierno de Iván Duque y el Ministro de Defensa habían manifestado que no ampliarían y tampoco reforzarían el PNIS; por el contrario, que su política antidrogas se concentraría en la aspersión aérea de glifosato, las erradicaciones violentas e incremento de fuerza pública en los territorios (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM–, 2018).

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA–, una organización que lucha por el reconocimiento, inclusión social y defensa de sus derechos, ha hecho parte de la COCCAM en esta subregión y se han unido al proceso general, dando a conocer las problemáticas que se han presentado con el incumplimiento del programa PNIS. Igualmente, la Asociación de Campesinos de Briceño –ASCABRI– (Asociación para el desarrollo productivo, económico, social y ecológico del municipio de Briceño), la cual articula a los productores locales, en una declaración de agosto de

2017 demandaba del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa respeto por los acuerdos de sustitución y denunciaba que las operaciones de erradicación forzosa estaban destruyendo la confianza de las comunidades y amenazando con socavar el proceso de paz en su conjunto (Jelsma & Coletta, 2017); también, que la Defensoría del Pueblo había confirmado las amenazas y homicidios contra líderes sociales involucrados en los programas de sustitución.

Por su parte, la Asociación Campesina de Ituango –ASCIT– denunció en agosto de 2017 las amenazas contra tres docentes y el desplazamiento de unos 70 estudiantes de la Institución Educativa Pedro Nel Gómez “por problemas relacionados con las estructuras de microtráfico que se han tomado el casco urbano de esa localidad” (Verdad Abierta, 2017b).

La Asociación de Campesinos de Toledo Norte de Antioquia –ASCAT-NA–, que nació del deseo de las comunidades de defender el territorio ante un modelo económico extractivista, también se unió al rechazo y la denuncia por la erradicación forzada de cultivos ilícitos por parte del Ejército Nacional, desconociendo que la comunidad se encontraba en la construcción de una propuesta de sustitución voluntaria formulada por el Comité cocalero municipal –COCCAM–, que se constituyó en septiembre de 2016 (Por los Derechos Humanos, s. f.); desde ese año, ASCAT-NA hace parte de la red de organizaciones sociales y campesinas del Norte de Antioquia.

La gravedad de la situación que viven los cocaleros en el Norte de Antioquia no se ha quedado en declaraciones. En abril de 2018, ante la ausencia de soluciones frente a la erradicación forzada, los campesinos del corregimiento El Aro del municipio de Ituango salieron de sus veredas e iniciaron una jornada de movilización. Seis asociaciones campesinas y mineras del Norte de Antioquia la iniciaron y otras veredas de Ituango se fueron sumando. En febrero de 2019 el periódico *El Espectador* informó que en Ituango alrededor de 1000 campesinos se movilizaron para exigir el cumplimiento de

los acuerdos en relación con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos:

Hasta que el gobierno nacional no cumpla con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) los campesinos que han vivido del cultivo de la coca no la erradicarán y seguirán rechazando la erradicación forzosa por parte del ejército nacional y la fumigación o aspersión con glifosato. (Hatrichiz, 2019)

Los miembros de todas esas organizaciones se hallan en peligro por la presencia paramilitar y de las bandas criminales interesadas en el narcotráfico que se han expandido en los municipios de Ituango, Toledo y Briceño al salir las FARC.

### 4.3. Por la defensa del territorio y el derecho a la tierra. Marcha Patriótica, Anzorc: paros agrarios y zonas de reserva campesina

Por lo menos desde el año 2013 se tienen noticias de la participación activa de campesinos del cañón del Cauca (Toledo, Ituango y Briceño), a través de sus asociaciones y organizaciones locales, en las movilizaciones que a nivel nacional buscan la defensa de la producción agraria nacional y la protección de los pequeños productores, entre otros objetivos. Los paros nacionales agrarios se produjeron en febrero, marzo y agosto del año 2013; en mayo de 2014, en octubre de 2016 y el más reciente en noviembre de 2019, en el marco del reciente paro nacional.

La Asociación Campesina de Ituango –ASCIT– elaboró un pliego de exigencias para presentar al Gobierno nacional en el marco del paro nacional agrario del mes de mayo de 2013. Como dichas peticiones fueron desoídas, al año siguiente (2014) fueron presentadas nuevamente. El pliego en mención, encabezado por la Asociación

Campesina del Norte Antioqueño, el Consejo Mayor Comunitario del Porce-AZA y la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Anorí, buscaban sumarse al pliego nacional que fue presentado en el marco del paro de agosto de 2014, a través de MIA, la Mesa de Integración Agraria. Entre sus exigencias micro –como el mejoramiento de determinadas vías terciarias, saneamiento básico o apoyo para los convites de las JAC, o las garantías para la creación de una mesa popular territorial, dirigidas a los alcaldes municipales– destacan otras como la no fumigación con glifosato, la mitigación de las crisis de paneleros, queseros, lecheros y agricultores generada por las políticas agrarias del Estado.

Organizaciones campesinas como ASCIT o ASCABRI de escala local, se articulan con asociaciones regionales como ASCNA, la cual, a su vez, lo hace con otras de corte nacional como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc– y Marcha Patriótica. De este modo, los campesinos no están aislados de lo que sucede en el resto del país. La visibilidad de sus organizaciones depende del carácter de los proyectos minero-energéticos que suceden en sus territorios y ante los cuales ellos se resisten: Hidroituango y las explotaciones mineras de propiedad de las empresas transnacionales AngloGold Ashanti, Nueva California S.A. y Red Eagle Mining con asiento en Santa Rosa de Osos.

Aunque ya se ha mencionado en los núcleos estratégicos de la subregión Nordeste (*Nordeste. Dinámicas territoriales*), conviene reafirmar aquí que Anzorc cuenta con 67 organizaciones campesinas en todo el país, muchas de las cuales van en pos de constituir sus zonas de reserva (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc–, s. f.), y de acuerdo con esta, en el proyecto de creación de la ZRC en Paramillo están involucrados los campesinos de Ituango.

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA– defiende los derechos humanos y el territorio que habitan los campesinos,

y visibiliza a nivel nacional e internacional las vulneraciones que sufren las comunidades campesinas en materia de Derechos Humanos (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU– Nodo Antioquia, 2016). Esta asociación, además, acompaña la planeación y desarrollo de programas para mejorar y dignificar condiciones de vida de campesinos, y la articulación con otras organizaciones (Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA–, s. f.).

Como es sabido, los integrantes de las organizaciones populares se encuentran en peligro por la presencia paramilitar. Por ejemplo, en un lapso de 10 meses han sido asesinados 4 miembros de la Asociación del Comité de Barequeros del Norte de Antioquia en Ituango (agosto de 2018). En 2018 también fue asesinado un miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuita en el municipio de Ituango.

En las cabeceras municipales la presencia del Estado se legitima a través de la administración municipal y la fuerza pública, pero en las áreas rurales, en muchas de las cuales el Estado no ha hecho presencia, actores externos a la institucionalidad determinan el orden social. Es allí donde las juntas de acción comunal configuran el escenario de participación comunitaria de mayor legitimidad. Igual papel representa la Asocomunal (Asociación de juntas de acción comunal), con la cual cuentan los 18 municipios que comprende la subregión Norte. La representatividad de las JAC se fundamenta en que a través de esta se articulan programas o proyectos de bienestar social para poblaciones distantes de las cabeceras municipales ejecutado por las administraciones, de acuerdo con los lineamientos de cada plan de desarrollo municipal (EPM *et al.*, 2011).

#### 4.4. Otros sectores sociales organizados

Mineros, afrodescendientes y mujeres también se vienen organizando en el Norte por la defensa de sus derechos, para exigir reconocimiento

y para aportar a la construcción de memoria de lo ocurrido durante el conflicto armado.

#### 4.4.1. Mineros

Desde el periodo colonial el altiplano de los Osos fue una zona de importancia económica por la minería del oro. Actualmente la subregión sigue siendo rica en este mineral, al cual, hasta hace pocos años, se dedicaban especialmente los mineros tradicionales o barequeros de las orillas del Porce, el Nechí y el Cauca.

De acuerdo con UNODC-SIMCI & Ministerio de Minas y Energía (2017) en Santa Rosa de Osos se encuentran algunas asociaciones de productores de oro, entre las cuales menciona Asomiplar (Asociación de Mineros de la Vereda Playa Larga), Asociación de Mineros del Cañón de Río Grande y Porce, y la Asociación de Mineros Nuevo Futuro (vereda San Isidro). Allí la actividad minera se reconoce como un sector de desarrollo económico y cuenta con mineros tradicionales organizados.

Desde 2007, con el impulso que el gobierno de Uribe Vélez le dio a la minería como uno de los “motores del desarrollo” y la promoción de concesiones y licencias mineras legitimadas por el nuevo y permisivo Código de Minas, se observa la presencia de la empresa minera Red Eagle Mining en etapa de explotación (UNODC-SIMCI & Ministerio de Minas y Energía, 2017).

#### 4.4.2. Organización de Afrodescendientes

La presencia de población afrodescendiente en el altiplano del Norte está asociada al trabajo esclavo en las minas de oro para los españoles durante la época colonial, actividad en la cual sustituyeron a los indígenas. De acuerdo con información de algunos guaqueros, se han encontrado tumbas de indígenas en posición sentada, acompañadas de artefactos de oro, aunque se dice que los Nutabes no

trabajaban el oro. También se han encontrado herramientas en piedra (hachas, punzones, cinceles) y ollas de barro.

La minería se inició en las bases del Riochico (San Pedro de los Milagros-Entrerriós). Allí fundaron primero el poblado de San Jacinto (s. XVII) y río arriba el de Petacas. El primero era un campamento casi exclusivamente de negros. El minero, amo de ellos, era don Sancho Londoño, quien a su muerte encomendó sus bienes y cuadrillas a una comunidad religiosa de monjas, quienes trataron bien a los esclavos, no permitían castigos, con alcalde pedáneo y guía espiritual. Por eso, cuando a mitad del siglo XIX se dio la libertad de los esclavos, ya los de Belmira eran libres. El segundo poblado, San Jacinto, tenía predominio de población mestiza y blanca. La Iglesia demandaba la anexión de San Jacinto a Petacas, pero los negros se resistieron a ella, por la segregación de que eran objeto por los mestizos (Arias Restrepo, 2014).

Como los demás pobladores rurales, también los negros eran arrieros (llevaban oro y traían abastecimientos para las minas), por los caminos de herradura que conducían de Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros a Santa Fe de Antioquia a través de Sopetrán y San Jerónimo; aunque los negros se dedicaban más a la minería. El camino que conectaba al altiplano norte con el Occidente sigue siendo importante, aun cuando se construyó carretera hace 20 años a través de Horizontes (corregimiento de Sopetrán); todavía se traen de allá productos agrícolas. Otro camino de arriería comunicaba a San Pedro de los Milagros y Belmira con Santa Rosa de Osos, el cual servía para el comercio de granos (maíz, arroz) que llegaban de la Costa. El otro camino comunicaba a Belmira con Ituango.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX la división política entre liberales y conservadores reprodujo diferencias étnico-raciales que se han ido limando paulatinamente. Producto de ese pasado esclavo y minero todavía existe cierto racismo de parte de algunos mestizos o supuestos “blancos”. Sin embargo, actualmente son cada vez más tenues los referentes culturales

diferenciadores en la población negra o afrodescendiente respecto de los demás habitantes del altiplano.

Corantioquia destaca la diferencia étnica de las poblaciones negras como un elemento a tener en cuenta en el relacionamiento institución-ciudadanía. En este contexto se promovió la constitución de consejos comunitarios desde donde se busca establecer interlocución con actores públicos y privados. Pese a que la subregión no cuenta con títulos colectivos de comunidades negras reconocidos hasta ahora, cuenta con varios consejos comunitarios afrodescendientes con sede en veredas y un consejo comunitario mayor conformado en 2015.

En Belmira existen cinco consejos comunitarios en las veredas Zafra (Afro Zafra), Zancudito (Zancubel), Potrerito, La Amoladora (Cocomevamol) y La Miel (Afro Miel) y un Consejo Mayor Comunitario de Belmira (Cocomabel) que los agrupa. Estos procesos se dieron alrededor del año 2000 con el acompañamiento de Corantioquia y con su ilustración respecto a las comunidades afrodescendientes. Los consejos de Potrerito y Amoladora tuvieron asesoría en 2018 de la Universidad de Antioquia. En 2019 se entregaron por parte del gobernador de Antioquia los planes de etnodesarrollo, que fueron contruidos de forma colectiva.

#### 4.4.3. Organizaciones de Mujeres

En la actualidad, en el municipio de Belmira se están conformando grupos de mujeres, específicamente para el cultivo de truchas y también están presentes en la Asociación de Truchicultores creada en 2003, en Asotrabe y Amoveza creada en 1998 (EN03. Belmira, 8/10/2019).

Producto de la información de campo se conoció que las mujeres también están muy presentes en las organizaciones de víctimas del conflicto armado. En Yarumal están Codesna, Canya, El Rosario, de la vereda Aguacatal, la Asociación de Mujeres de Yarumal, en organizaciones de los corregimientos Ochalí, El Llano y La Loma, Convido

y la Asociación de Mujeres Campesinas. Solo las mujeres del corregimiento La Loma, Las Brisas y El Rosario no hacen parte del movimiento Madres por la Vida, única organización que mantiene comunicación con la alcaldía municipal (EN10. Yarumal, 9/10/2019).

De acuerdo con otras personas entrevistadas, 1989 fue un año importante para la organización social de mujeres, luego de que en 1987, durante el gobierno de Virgilio Barco, se conformó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y se creó la figura de madres comunitarias. Yarumal es el centro zonal del ICBF desde donde se atienden los demás municipios del Norte. Las madres comunitarias de Yarumal en 1991 se conformaron como asociación de mujeres cabeza de familia. En 2001 legalizaron la organización como Asociación de Mujeres Campesinas Cabeza de Familia y Empresarias del Norte de Antioquia. Esta asociación la conforman hoy 40 mujeres, se denominan pares comunitarias y son, al menos, dos por cada uno de los municipios del Norte.

En 2006, con la desmovilización paramilitar, las mujeres decidieron aportar a la verdad y adelantar procesos de memoria del conflicto, para lo cual empezaron a documentar los casos. En 2007 se creó la organización Madres por la Vida, grupo de víctimas del conflicto armado (mujeres y hombres), en el marco de la Ley de Justicia y Paz; iniciaron una campaña que se llamó “deletrear la piel por la verdad, la memoria, la justicia y la reparación con sentido para las mujeres”, apoyado por Ruta Pacífica de Mujeres Colombianas y Redepaz y documentaron no menos de 4000 casos de la mano de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Paz y Reconciliación, lo que hoy es la Unidad para las Víctimas, y la Universidad de Antioquia, a través del Consultorio Jurídico. Actualmente lideran la Mesa de derechos humanos, víctimas y construcción de paz, coordinada por la sección de gobierno de la Gobernación de Antioquia y la Gerencia de Paz.



## Conclusión

De los cuatro núcleos estratégicos identificados para el Norte, el primero, relacionado con el ordenamiento territorial, plantea como una de sus características más sobresalientes la disparidad entre zonas, la fragmentación y las dificultades que ello opone a la configuración de esta subregión como proyecto social y político.

El hecho de que ninguna de las grandes obras de infraestructura que se proyectan para el departamento en el futuro mediano –vías 4G, Ferrocarril de Antioquia y puertos de Urabá– toca directamente con esta subregión, sumado a la reducción del tráfico automotor sobre la Troncal Occidental con la construcción de las vías 4G (Magdalena 1 y Conexión Norte), donde se sitúan los centros subregionales principales, sustentan la probabilidad de que a futuro la subregión pierda dinamismo, la fragmentación se acentúe y deba encontrar nuevas formas de potenciar su competitividad.

Las condiciones económicas son dispares entre zonas y los sistemas productivos presentan diferencias sustanciales derivadas de la ausencia de infraestructura, de la distancia respecto del Valle de Aburrá y de los proyectos económicos que se han priorizado en cada una, todo lo cual le aporta a la fragmentación subregional. Solo cinco municipios del Altiplano Norte, donde predomina la economía ganadera semiintensiva y la producción tecnificada de leche,

presentan condiciones económicamente aceptables; en los demás, estas son críticas o muy críticas.

Otro de los factores de desconexión entre zonas en la subregión ha sido la especialización de algunos municipios de la vertiente del río Porce-Nechí en el renglón de la generación de energía hidroeléctrica. Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe han abandonado su vocación agrícola y campesina ante las expectativas de mejoramiento de sus condiciones vida con las regalías y las transferencias de recursos del sector energético, y han estado sometidos a los intereses de EPM y a las necesidades de la ciudad de Medellín.

El segundo núcleo está relacionado con el deterioro de ecosistemas naturales y la pérdida de biodiversidad por intervenciones de carácter productivo e infraestructural. En primer lugar, se identificaron las áreas ambientalmente protegidas en la subregión y las dificultades que ellas afrontan en la actualidad, dificultades asociadas con los conflictos de usos del suelo agrícola y pecuario, y con la instalación de infraestructuras energéticas, que han puesto gran presión sobre el recurso hídrico y de los cuales se han derivado conflictos socioambientales.

La reducción de las áreas de bosque se explica principalmente por la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción ilegal de maderas y otros productos, el establecimiento de cultivos ilícitos y la minería ilegal. Esto ocurre muy especialmente en dos zonas: el área de amortiguación del PNN Paramillo y el cañón del río Cauca.

Las infraestructuras hidroeléctricas de megaproyectos como Hidroituango han mostrado en sus promotores falta de visión equitativa, ecológica y sostenible en su ejecución, pues no solamente se han producido daños irreparables en la cuenca del río Cauca y su ecosistema, sino que ha creado una situación de marginalidad económica, desplazamiento forzado de amplios grupos poblacionales.

El núcleo tercero plantea cómo esta subregión ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado desde la década de los

años 80, época desde la cual la presencia de grupos guerrilleros y de paramilitares ha sido intensa. Desde 2016, con ocasión de los Acuerdos de Paz con las FARC y tal como ha sucedido en el resto del país, también en el Norte los espacios dejados por la guerrilla desmovilizada no fueron ocupados por las fuerzas del Estado; ello podría explicarse por la polarización política y los vacíos en la implementación de los acuerdos, creados por la escasa voluntad por parte del Gobierno nacional elegido en 2017 para su cumplimiento. Esto posibilitó que bandas emergentes del paramilitarismo y la guerrilla, nuevos carteles de la droga y la delincuencia común, tomaran el control de dos actividades fundamentales que han sido motores del conflicto armado: los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Al lado de Bajo Cauca y Nordeste, el Norte hace parte de las tres subregiones de Antioquia donde se han recrudecido el conflicto armado y las disputas bélicas por el control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades económicas ilegales.

A pesar de la violencia que no cesa, varios de los programas acordados entre gobierno colombiano y FARC han intentado abrirse paso con grandes dificultades, entre ellos la conformación del ETCR en la vereda Santa Lucía en Ituango<sup>1</sup>; la inclusión de Ituango, Briceño y Valdivia en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET–; también, la inclusión de nueve municipios de la subregión (Angostura, Briceño, Campamento, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia y Yarumal) como municipios Zomac; la acogida de un importante número de campesinos cultivadores de coca de los municipios de Briceño, Campamento, Valdivia, Anorí, Ituango y Toledo al PNIS; aun cuando los asesinatos de líderes cocaleros no han frenado en el bloque Norte-Nordeste-Bajo Cauca de Antioquia desde fines del año 2017 y el impulso dado

.....  
1. Después de haber terminado de escribir este documento, los integrantes de este ETCR se vieron forzados, en el mes de julio de 2020, a trasladarse a Mutatá debido la intensificación de las amenazas contra sus vidas por parte de actores armados.

a la erradicación forzada por la fuerza pública han demostrado que no existen garantías de seguridad efectivas para ellos.

El núcleo cuarto se refiere al surgimiento y fortalecimiento de organizaciones sociales de distinto orden y la intensificación en los años recientes de las movilizaciones por la defensa de los derechos fundamentales de la población, situación que no tenía antecedentes en esta subregión. Se plantean, en síntesis, tres grandes asuntos que han unificado a buena parte de la población para impulsarla a organizarse, manifestarse y adelantar importantes procesos sociales de resistencia: 1) Los efectos económicos y socioambientales de las megaobras hidroenergéticas en el cañón del río Porce; 2) Los incumplimientos por parte del Estado en materia de seguridad y Acuerdos de Paz; y 3) La defensa del territorio y el derecho a la tierra, donde participan numerosas organizaciones de mineros y campesinos. Se mencionan también las organizaciones y movilizaciones de mujeres y de afrodescendientes.



## Bibliografía

- Agencia Prensa Rural & Ramírez, B. (2019a, 27 de marzo). Contingencia en Hidroituango atrasa implementación de Acuerdo de Paz en Valdivia. *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/contingencia-hidroituango-atrasa-implementacion-acuerdo-paz-valdivia/>
- Agencia Prensa Rural & Ramírez, B. (2019b, 2 de julio). “La tierra de Ituango está enferma”. *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/la-tierra-de-ituango-esta-enferma/>
- Arias Restrepo, L. A. (2014). *Belmira, 200 años de vida municipal*. Medellín.
- Asociación Campesina del Norte de Antioquia –ASCNA–. (s. f.). Misión y Visión. *Asociación Campesina del Norte de Antioquia*. <http://ascna.blogspot.com/p/mision-y-vision.html>
- Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –Anzorc–. (s. f.). Directorio de Organizaciones pertenecientes a Anzorc. <http://anzorc.com/directorio-de-organizaciones-pertenecientes-a-anzorc/>
- Ávila, C. (presentadora). (2019, 18 de octubre). Zona de influencia de Hidroituango, ¿un cementerio con miles de desaparecidos? [episodio de podcast]. En *Las voces desde el Territorio*. El Espectador. [https://www.speaker.com/user/el\\_espectador/desaparecidos-en-hidroituango?utm\\_medium=widget&utm\\_source=user%3A10844162&utm\\_term=episode\\_title](https://www.speaker.com/user/el_espectador/desaparecidos-en-hidroituango?utm_medium=widget&utm_source=user%3A10844162&utm_term=episode_title)
- Bravo, J. M. (2010, 13 de agosto). Troncal de Occidente y su paso por Antioquia. *El Mundo*. <https://historico.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=156654>
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2019). *Perfiles socioeconómicos de las subregiones de Antioquia-Norte*. Medellín.
- Campos Cabral, V. (2016, 4 de agosto). Conflictos socioambientales. Una introducción. *Saberes y Ciencias*. <https://saberesyciencias.com.mx/2016/08/04/conflictos-socioambientales-una-introduccion/>

- Cárdenas Delgado, O. (2011, 16 de febrero). Porce IV: Las comunidades o los Macroproyectos. *Periferia Prensa*. <https://periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/715-porce-iv-las-comunidades-o-los-macroproyectos>
- Cardona Trujillo, H. (2019). *Implicaciones de la infraestructura en el desarrollo territorial de Antioquia*. Medellín: Instituto de Estudios Regionales –INER–.
- Castillo Espitia, N. (2018, 18 de mayo). ¿Quiénes son los Cañoneros desplazados por Hidroituango? *Ríos Vivos Colombia*. <https://riosvivoscolombia.org/afianzamiento-cultural/quienes-son-los-canoneros-desplazados-por-hidroituango/>
- CECODES. (2017, 23 de enero). EPM firma alianza en pro del desarrollo sostenible. *CECODES*. <https://www.cecodes.org.co/site/epm-firma-alianza-en-pro-del-desarrollo-sostenible/>
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo & Movimiento Ríos Vivos Antioquia. (2019, 26 de agosto). Alerta Temprana urgente sobre situación de riesgo inminente para integrantes del Movimiento Ríos Vivos en especial para su vocera Isabel Cristina Zuleta López. *Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo*. <https://www.colectivodeabogados.org/./?Alerta-Temprana-urgente-sobre-situacion-de-riesgo-inminente-para-integrantes>
- Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU– Nodo Antioquia. (2015). *Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Antioquia. ¡Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra!* Medellín. <http://ipc.org.co/index.php/publicacion/estado-de-los-derechos-humanos-en-antioquia-2015/>.
- Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU– Nodo Antioquia, Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, Corporación Jurídica Libertad –CJL– & Fundación Sumapaz. (2017). *Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia*. Medellín. <https://coeuropa.org.co/wp-content/uploads/2017/12/Presencia-de-grupos-paramilitares-y-algunas-de-sus-din%C3%A1micas-en-Antioquia.-cuatro-casos-de-estudio.pdf>
- Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM–. (2018). *Informe Nacional sobre violación de Derechos Humanos en la implementación del Punto 4 «Solución al problema de las drogas ilícitas» a la COCCAM*. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/08/INFORME-NACIONAL-SOBRE-VIOLACION-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-LA-IMPLEMENTACION-DEL-PUNTO-4-COCCAM..pdf>
- Corantioquia. (2006). *Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR–, 2007-2019*. Medellín.

- Corantioquia. (2016). *Informe de avance de la ejecución del plan de acción cuatrienal 2016-2019. "Por el patrimonio ambiental de nuestro territorio". Vigencia 2016.* Medellín.
- Defensoría del Pueblo de Colombia. (2017). *Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación [Informe especial]*. Defensoría del Pueblo de Colombia. Bogotá. <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/6646/Consulte-aqu%C3%AD-el-Informe-Espacios-Territoriales-de-Capacitaci%C3%B3n-y-Reincorporaci%C3%B3n.htm>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– & Ministerio de Agricultura. (2015). *Censo Nacional Agropecuario 2014.*
- Dirección de Regionalización, Instituto de Estudios Regionales –INER–, Aramburo Siegert, C. I., Bejarano Castañeda, O. R., Escobar Escobar, J. C. & Vásquez Valencia, N. E. (2007). *Norte, desarrollo regional: Una tarea común Universidad-Región.* Universidad de Antioquia. Medellín.
- El Colombiano (2019, 14 de marzo). *Bandas del Valle de Aburrá se expanden en pueblos de Antioquia. Revelaciones del bajo mundo. El Colombiano.* <https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/bandas-del-valle-de-aburra-se-expanden-en-pueblos-de-antioquia/9757>
- EPM, Integral S.A. & Solingral. (2011). *Actualización estudio de impacto ambiental-Evaluación ambiental.* <https://www.epm.com.co/site/Portals/0/ACTUALIZACI%C3%93N%20ESTUDIO%20DE%20IMPACTO%20AMBIENTAL-EVALUACI%C3%93N%20AMBIENTAL.pdf>
- FAO & Agencia de Desarrollo Rural. (2019). *Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial. Tomo II. Departamento de Antioquia:* <https://www.adr.gov.co/servicios/pidaret/ANTIOQUIA%20TOMO%20II.pdf>
- Fundación Neotrópicos (1997). *PNN Paramillo Actividades Prioritarias.* Empresa Multipropósito Urrá S. A. <http://www.neotropicos.org/Informes/PNNParamillo0997.pdf>
- Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín & Área Metropolitana. (s.f). *Plan de competitividad para Medellín.* <https://slideplayer.es/slide/1538276/>
- González Posso, C. (2016). *El resultado del plebiscito en cifras y mapas.* <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/10/el-resultado-del-Plebiscito-en-cifras.pdf>
- Grupo EPM. (2017, 14 de septiembre). *EPM y PNUD firman alianza para beneficiar 14 organizaciones comunitarias.* Grupo EPM. <https://www.grupo-epm.com/site/home/sala-de-prensa/noticias/epm-y-pnud-firman-alianza-para-beneficiar-14-organizaciones-comunitarias>

- Gudynas, E. (2011). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. En *Más Allá del Desarrollo* (1ª. ed., pp. 21-53). Quito: Fundación Rosa Luxemburg, Abya Yala.
- Gutiérrez, P. A. (2019, 2 de diciembre). Una incertidumbre más para el mecanismo de Obras por Impuestos. Fundación Ideas para la Paz –FIP–. <http://empresaspazddhh.ideaspaz.org/una-incertidumbre-mas-para-el-mecanismo-de-obras-por-impuestos>
- Hatrachiz, Z. (2019, 18 de febrero). Campesinos de Ituango se movilizan contra la erradicación forzada de cultivos de coca. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/campesinos-de-ituango-se-movilizan-contra-la-erradicacion-forzada-de-cultivos-de-coca-articulo-857657>
- Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI–, Comisión Colombiana de Juristas, Verdad Abierta, CINEP, Programa Somos Defensores, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos –CCEEU–, Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT– & Confederación Acción Comunal Colombia. (2018). *¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo*. Bogotá. [http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user\\_upload/iepri\\_content/boletin/patrones6.pdf](http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/patrones6.pdf)
- Instituto de Estudios Regionales –INER– & Universidad de Antioquia (2018). *Gran Acuerdo por Antioquia 2050, Fase I. Análisis de tendencias de la Subregión Norte*. Medellín. [Digitado].
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– & Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. (2002). *Zonificación de los conflictos de uso de las tierras del país. Uso adecuado y conflictos de uso de las tierras en Colombia*. Bogotá.
- Jelsma, M. & Coletta, Y. (2017, 11 de agosto). La coca y el Acuerdo de Paz en Colombia. Comentario sobre el proyecto de sustitución de cultivos en Briceño. *Transnational Institute*. <https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/la-coca-y-el-acuerdo-de-paz-en-colombia>
- Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA–. (2017). *Acta de Acuerdos N°001. Reunión Re-Apertura de diálogo de la MIA Nacional-Ministerio del Interior*.
- Movimiento Ríos Vivos Antioquia. (2018a, 22 de junio). Carta abierta a la Gobernación de Antioquia. *Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo*. <https://www.colectivodeabogados.org/./?Carta-abierta-a-la-Gobernacion-de-Antioquia>

- Movimiento Ríos Vivos Antioquia. (2018b, 24 de agosto). Si EPM no le cumple a la autoridad ambiental nosotros qué esperamos como comunidades: Ríos Vivos Antioquia. *Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo*. <https://www.colectivodeabogados.org/./?Si-EPM-no-le-cumple-a-la-autoridad-ambiental-nosotros-que-esperamos-como>
- Movimiento Ríos Vivos Antioquia. (2018c, 26 de octubre). Movimiento Ríos Vivos Antioquia recibe amenaza colectiva e individual hacia sus líderes fundadores. *Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo*. <https://www.colectivodeabogados.org/./?Movimiento-Rios-Vivos-Antioquia-recibe-amenaza-colectiva-e-individual-hacia-sus>
- Movimiento Ríos Vivos. (s. f.). Lo que debes saber sobre Hidroituango. *Ríos Vivos Colombia*. Recuperado 30 de marzo de 2020, de <https://riosvivoscolombia.org/no-a-hidroituango/lo-que-debes-saber-sobre-hidroituango/>
- Observatorio de Drogas de Colombia –ODC–. (2017). *Reporte de drogas de Colombia*. Bogotá.
- Pino Franco, Y. & Sánchez Calle, D. (2016). Consejo Mayor Comunitario del Porce –AZA– (Antioquia) por la defensa del Territorio. Experiencia organizativa por la dignidad. *Revista Kavilando*, 2 (8), 145-156. <https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/175>
- Por los Derechos Humanos. (s. f.). *Asociación de campesinos de Toledo rechaza erradicación de cultivos ilícitos*. Por los Derechos Humanos. <https://www.porlosderechoshumanos.com>
- Presidencia de la República. (2017a, 29 de mayo). *Por la cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS–*. [Decreto-Ley 896 de 2017]. DO: 50.248 / [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto\\_0896\\_2017.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0896_2017.html)
- Presidencia de la República. (2017b, 9 de octubre). *Estos son los municipios de las Zomac*. Presidencia de la República. <http://es.presidencia.gov.co/noticia/171009-Estos-son-los-municipios-de-las-Zomac>
- Ramírez, B. & Agencia Prensa Rural. (2019, 14 de junio). Se esfuma la esperanza de paz en Ituango. *Agencia Prensa Rural*. <https://prensarural.org/spip/spip.php?article24441>
- Ramírez, B. (2016, 12 de agosto). Toledo (Antioquia): Manos sin tierra y recuerdos de violencia. *Agencia Prensa Rural*. <https://prensarural.org/spip/spip.php?article19967>
- Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI– & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–. (2018). *Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017*. Bogotá: SIMCI-UNODC. [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_Monitoreo\\_territorios\\_afectados\\_cultivos\\_ilicitos\\_2017\\_Resumen.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf)

- Svampa, M. (2012). Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas? En *Más allá del desarrollo* (1ª. ed., pp. 185-218). Quito: Fundación Rosa Luxemburg, Abya Yala.
- Torres Sánchez, M. A. (2013). *Análisis de nuevas dinámicas territoriales por proyectos de infraestructura y su influencia en la generación de conflictos socio ambientales. Caso de estudio: Hidroituango* [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UN. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/47235>
- UAESPNN (2005). Parque Nacional Natural Paramillo. Plan de Manejo 2004-2011. Dirección Territorial Noroccidental. Córdoba. <http://www.parques-nacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/Paramillo.pdf>
- UNODC-SIMCI & Ministerio de Minas y Energía. (2017). *Caracterización de los rasgos más sobresalientes en la dinámica de explotación ilícita de oro en el Departamento de Antioquia*.
- Valdés Correa, B. (2019, 12 de noviembre). La reconciliación de las mujeres mineras de Antioquia con EPM. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-reconciliacion-de-las-mujeres-mineras-de-antioquia-con-epm-articulo-890598>
- Vásquez Peinado, A. J. & González Caro, S. (2017). Estados de los bosques de Antioquia entre 1990-2015. En *Bosques Andinos. Estado actual y retos para su conservación en Antioquia* (1ª. ed., pp. 61-84). Medellín: Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe-Programa Bosques Andinos (COSUDE).
- Verdad Abierta. (2017a, 4 de noviembre). Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental. *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/campesinos-cocaleros-en-antioquia-intimidados-y-con-poco-apoyo-gubernamental/>
- Verdad Abierta. (2017b, 22 de diciembre). Muerte de excombatientes de las Farc empañan seguridad en Ituango. *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/muerte-de-excombatientes-de-las-farc-empanan-seguridad-en-ituango/>
- Verdad Abierta. (2019, 27 de marzo). Contingencia en Hidroituango atrasa implementación de Acuerdo de Paz en Valdivia. *Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/contingencia-hidroituango-atrasa-implementacion-acuerdo-paz-valdivia/>
- Yarce Ospina, E. & Jaimes, M. (2019, 27 de agosto). *Emprendimientos que transforman vidas*. Relief Web. <https://reliefweb.int/report/colombia/emprendimientos-que-transforman-vidas>



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons  
Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Impreso en diciembre de 2022. Medellín, Colombia



Plan 2018-2021  
de **Acción**  
Institucional